

SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:
CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES,
GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO
DE DESARROLLO

REPÚBLICA DOMINICANA





Copyright © [2018] Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Esta es una publicación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vicepresidencia de Países.

**SECTOR EXTRACTIVO Y SOCIEDAD CIVIL:
CUANDO EL TRABAJO DE COMUNIDADES,
GOBIERNOS E INDUSTRIAS ES SINÓNIMO
DE DESARROLLO**

REPÚBLICA DOMINICANA

El 4% del PBI de América Latina y el Caribe proviene del sector extractivo, un porcentaje equivalente al generado por la agricultura en la región. Para impulsar crecimiento sostenible, es necesario un relacionamiento efectivo entre gobiernos, empresas y sociedad civil. En este diagnóstico de República Dominicana, el BID busca dar luz a las buenas prácticas entre actores del sector extractivo sobre acciones de información, diálogo, consultas, colaboración y alianzas que están generando desarrollo en el país. De los hallazgos del diagnóstico se ha generado además una hoja de ruta, para orientar a los actores en el fortalecimiento de su relacionamiento.

El presente cuadernillo se enfoca en los hallazgos de República Dominicana y forma parte del diagnóstico regional que fue realizado en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. La publicación completa está disponible en: <https://publications.iadb.org/es/sector-extractivo-y-sociedad-civil-cuando-el-trabajo-de-comunidades-gobiernos-e-industrias-es>

Publicación elaborada gracias al Fondo Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF) financiado por el Gobierno de Canadá

Liderazgo, coordinación de equipos y contenidos

Flavia Milano, Especialista Senior en Operaciones/Sociedad Civil, Vicepresidencia de Países, BID – Líder de Proyecto

Revisión y ajuste de contenidos

Martin Walter, Especialista de la Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID
Maria Dolores Vallenilla Sosa, Iniciativa para el Sector Extractivo, INE/INE, BID

Ediciones:

Irene Irazábal Briceño, Vicepresidencia de Países, BID
Viviane Espinoza, Vicepresidencia de Países, BID

Coordinación e investigación general:

Volker Frank (Fundación Futuro Latinoamericano)
Javier Caravedo (ProDiálogo)
Iván Ormachea (ProDiálogo)
Mitzy Canessa (Grupo de Diálogo Latinoamericano)
Bruno Gomes (Grupo de Diálogo Latinoamericano)

Equipo de investigación por país

Cristina Thomen Ginebra, Organismo Latinoamericano de Minería – Investigadora y punto focal caso República Dominicana

Especial agradecimiento

La líder de proyecto, el equipo de coordinación e investigadores país dan su especial agradecimiento y recordatorio a José Luis Lopez Follegatti, promotor del diálogo sobre minería y desarrollo sostenible en el Perú, quien en vida participó y jugó un rol importante para la conformación de este equipo y el desarrollo exitoso de esta investigación.

Contenido*

1. INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO REGIONAL	4
1.1. LOS TRES ACTORES INVOLUCRADOS CON LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	9
1.1.1. <i>Empresas extractivas</i>	9
1.1.2. <i>Gobierno</i>	11
1.1.3. <i>Sociedad Civil</i>	15
1.2. LOS COSTOS DE LOS CONFLICTOS	17
2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL	20
2.7. REPÚBLICA DOMINICANA	23
2.7.1. <i>Cuadro de Resumen</i>	23
2.7.2. <i>Introducción</i>	25
2.7.3. <i>Buenas prácticas</i>	26
2.7.4. <i>Análisis de Actores</i>	43
2.7.5. <i>Marco Legal</i>	45
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL DIAGNÓSTICO REGIONAL	47
3.1. CONCLUSIONES	48
<i>Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores</i>	48
<i>Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento</i>	48
<i>Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador</i>	49
<i>Sobre los principales actores</i>	49
<i>Sobre los temas abordados en las prácticas</i>	50
<i>Sobre el relacionamiento</i>	51
<i>Sobre las prácticas de relacionamiento</i>	52
3.2. RECOMENDACIONES	54
<i>Para las empresas</i>	54
<i>Para la Sociedad Civil</i>	55
<i>Para el Estado</i>	56
<i>Para los tres actores</i>	57
4. HOJA DE RUTA	58
HOJA DE RUTA DE REPÚBLICA DOMINICANA	60

*La tabla de contenidos de este cuadernillo mantiene la numeración original del diagnóstico regional.

Siglas y acrónimos

ACM	Asociación Colombiana de Minería
ACP	Asociación Colombiana de Petróleo
AIDSESP	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
AMEXHI	Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
AMSA	Antofagasta Minerals
AMUCEP	Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de Huari
ANDI	Asociación de Industriales de Colombia
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ASF	Auditoría Superior de la Federación
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAEM	Cámara Argentina de Empresarios Mineros
CAMIPE	Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Inc.
CAR	Corporaciones Autónomas Regionales
CEAS	Comisión Episcopal de Acción Social
CEMDA	Centro Mexicano en Derecho Ambiental
CERFORMOMALI	Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc.
CFE	Consejo Federal de Energía
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económica
CINEP	Centro de Investigación y Educación Popular
CITT	Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica
CMAP	Comité de Monitoreo Ambiental Participativo
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre
COFEMA	Consejo Federal del Ambiente
COFEMIN	Consejo Federal de Minería
CONADI	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONALEP	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CONAP	Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
CORMIDOM	Corporación Minera Dominicana
CVSA	Cerro Vanguardia SA
DGM	Dirección General de Minería
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EITI	Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva
ENTRE	Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva
EVIS	Evaluación de Impacto Social
FALCONDO	Falconbridge Dominicana
FARN	Fundación Ambiente y Recursos Naturales
FFLA	Fundación Futuro Latinoamericano
FOMISAR	Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez
GDL	Grupo de Diálogo Latinoamericano Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible
GDMDS	Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible
GMN	Grupo Multipartícipe Nacional de EITI
ICMM	International Council on Mining and Metals
IED	Inversión Extranjera Directa
IMCO	Instituto Mexicano para la Competitividad
INFOTEP	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
LWR	Lutheran World Relief
MAC	Asociación Minera de Canadá
MBV	Mesa de Buenos Vecinos
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MIMARENA	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MSX	Minera San Xavier

OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSC	Organización de la Sociedad Civil
PACMA	Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
PAE	Panamerican Energy
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PGS	Plan de Gestión Social
PIB	Producto Interno Bruto
PUCP	Universidad Católica del Perú
PVDC	Pueblo Viejo Dominicana Corporation / Barrick Pueblo Viejo
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RSE	Responsabilidad Social Empresarial
SEMARNAT	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER	Secretaría de Energía
SMCV	Sociedad Minera Cerro Verde SAA
SNMPE	Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
SODOGEO	Sociedad Dominicana de Geología.
SPH	Sociedad Peruana de Hidrocarburos
TSM	iniciativa “Hacia una minería sustentable”
UAGRO	Universidad Autónoma de Guerrero
UASD	Universidad Autónoma de Santo Domingo
UBA	Universidad de Buenos Aires
UNMSM	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
UNSAM	Universidad Nacional de San Martín
UTECO	Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales

1. INTRODUCCIÓN

Los países ricos en recursos naturales y la consiguiente actividad extractiva de esos recursos no renovables -minerales, petróleo y gas-, impulsan varias perspectivas de aproximación. El análisis económico permite estimar los costos de inversión, la rentabilidad de las empresas y los aportes con los que el sector extractivo contribuye a la economía de una nación o región. Desde un punto de vista de adelantos tecnológicos, las industrias extractivas requieren el empleo de sofisticadas tecnologías de punta con el potencial de contribuir a reducir impactos adversos. Desde lo ambiental, por la dimensión propia de este tipo de proyectos, se habla de los impactos de las actividades extractivas en la naturaleza y la biodiversidad, la competencia por el uso de recursos hídricos, las consecuencias en los cultivos y la posible contaminación de ríos o fuentes acuíferas y donde, las tecnologías mencionadas, pueden jugar un papel decisivo en las medidas de ahorro y mitigación.

Desde la perspectiva social se requiere una sofisticación no menor para abarcar y analizar oportunidades y desafíos entre los actores involucrados, frente a las diferentes fases de los grandes proyectos, como la exploración, explotación y cierre, especialmente respecto a las comunidades aledañas¹.

El diagnóstico que se presenta a continuación se acerca al sector extractivo desde una perspectiva de relacionamiento entre los principales actores involucrados, el Gobierno, la Empresa y las Comunidades afectadas directa o indirectamente por la actividad extractiva. El diagnóstico se aleja de un enfoque clásico hacia las actividades extractivas como “de maldición de los recursos naturales” para investigar y poner en evidencia aquellos hallazgos donde el relacionamiento de actores efectivo representó una oportunidad de desarrollo.

El diagnóstico como línea inicial partió de información conocida basada en estudios previos y experiencia de campo, repasando que la actividad extractiva conlleva el involucramiento de esos tres actores en diferentes capacidades: (i) el **gobierno** y su rol a nivel nacional, provincial y/o municipal respecto a los pasos relacionados con la actividad extractiva como el diseño y asignación de pliegos de licitación, autorizaciones, monitoreo de implementación, con un lapso temporal de influencia de las decisiones políticas (en ausencia de instituciones que respalden dichas decisiones) más breve comparado con los otros dos actores, (ii) la **empresa** que por la naturaleza de la actividad extractiva a largo plazo permanece en el terreno por periodos en general comprendidos por decenios y que luego de



¿Cómo los gobiernos, las comunidades y las industrias pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?





obtenidas las autorizaciones y licencias (incluida la social), se emplaza geográficamente y pasa a formar parte de la vida de las comunidades aledañas a la zona de extracción. Esta particularidad no menor que define a la actividad extractiva, tiene una influencia en el tejido social y la economía local con impactos en la composición de los grupos tradicionales: (iii) las **comunidades**, además de ser responsables de dar información y comprender el alcance del proyecto para otorgar, la licencia social para operar permanecen en el terreno por generaciones y mantienen un relacionamiento en cada fase de la actividad (tratándose de extracciones “onshore”, desde la apertura al cierre de actividades). La actividad extractiva puede aportar oportunidades a las comunidades y también pueden conllevar nuevas tensiones al interno de la propia población. Entre estas oportunidades y tensiones estaría la empleabilidad de trabajadores provenientes de las comunidades. Por los requerimientos específicos y perfil técnico esta empleabilidad tiende a ser baja, generándose mayor competitividad por puestos de servicios. En ocasiones esta circunstancia puede abrir una brecha entre aquellos trabajadores provenientes de las comunidades versus miembros de la misma comunidad sin trabajo en la empresa. Las comunidades son susceptibles de fracturas internas donde no existían conflictos con anterioridad. Este factor también viene con el arribo de trabajadores fuera de la comunidad que generan un aumento significativo de la población local con nuevos habitantes en la zona y ajenos a las tradiciones y ritmos rurales. Esta circunstancia a su vez genera una natural presión sobre un mismo territorio y respecto a los mismos recursos. Nuevas construcciones de infraestructura y los tiempos

de obras que afectan la circulación al interno de las comunidades, son también otros de los conflictos registrados como así; posible aumento del consumo de alcohol; desbalance del número de hombres respecto a mujeres; potencial aumento de crímenes de género; inicio o aumento de actividades de prostitución. Mención aparte merece la capacidad de la empresa de influir en la cadena de valor con diferentes emprendimientos y organizaciones de servicios que pueden crecer en oportunidades de desarrollo por la llegada de la empresa y que también, en muchos casos, dejan a la empresa extractiva a merced de la fijación monopólica de los precios de esos servicios.

¿Cómo las partes involucradas pueden utilizar la diversidad de sus intereses y necesidades para generar beneficios mutuos para todos los actores, en respeto del ambiente y bajo una lógica de sostenibilidad?

Para responder a esa pregunta, el presente diagnóstico se enfocó en estudiar las buenas prácticas de relacionamiento, que han conseguido tanto resultados medibles y comparables susceptibles de ser replicados, como nuevos emprendimientos productivos o avances significativos como por ejemplo en sectores de educación y salud como también impactos intangibles como la generación de confianza y procesos de colaboración. El enfoque busca evidenciar lo que sí funciona en una actividad que representa para algunos de los países ricos en recursos naturales más del 50% de sus ingresos fiscales². Las buenas prácticas que se reúnen en esta publicación dan pautas y orientaciones para consolidar y mejorar el relacionamiento entre los tres actores y muestran caminos innovadores, por los que el sector extractivo pueda aportar al desarrollo nacional y local en los países de América Latina y el Caribe.



**La actividad extractiva
representa para
algunos de los países
ricos en recursos
naturales más del 50%
de sus ingresos fiscales.**

Las buenas prácticas muestran que un buen relacionamiento genera confianza, logra acuerdos sobre temas en disputa, fortalece la economía local, genera prácticas ambientalmente sostenibles y mejora la calidad de vida de la población. Las propias buenas prácticas también indican que el relacionamiento de actores es el resultado de procesos donde se requiere una visión de mediano y largo alcance, adherida a la asignación e inversión de recursos humanos y financieros.

Para este diagnóstico se seleccionaron países de la región ricos en recursos naturales con diferentes perfiles y experiencia en temas extractivos: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana.

Para la elaboración de este estudio se validaron las experiencias encontradas, triangulando las mismas con representantes de industria/empresa, comunidades/sociedad civil y gobiernos, para asegurar su acuerdo respecto a la experiencia considerada como buena práctica según criterios anteriormente definidos³. Ulteriormente, se realizó una segunda validación mediante diferentes fuentes de información como material escrito, entrevistas, visitas de campo y mesas de trabajo.

A fin de ordenar el universo de experiencias se agruparon metodológicamente los hallazgos en cinco niveles de relacionamiento⁴.



Información:

Este nivel comprende la entrega de datos y referencias sobre el proyecto extractivo por parte de la empresa y del gobierno. También, incluye la facilitación de información por parte de las organizaciones de la sociedad civil presentes sobre el territorio y los portadores de interés.



Diálogo:

El diálogo se refiere al intercambio activo, continuo e informal que a partir de diversos grados de contacto entre los actores en torno al sector extractivo busca crear o fortalecer relaciones constructivas entre las partes. Estos procesos pueden ser eventuales o sostenidos en el tiempo, con un potencial de cambio constructivo de las relaciones.



Consulta pública⁵:

La consulta se considera un proceso formal, público y organizado en etapas que responde a obligaciones legales o regulatorias, así como principios de mejores prácticas universales, con el objetivo de recibir insumos respecto a un proyecto extractivo.



Colaboración

Son las acciones en las que las comunidades, la empresa extractiva o gobierno elabora productos de conocimiento o en las que la misma comunidad participa en iniciativas de formación para agregar capital humano capacitado que beneficie el crecimiento económico local.



Alianza

Son las acciones en las que se incluyen y financian comunidades para que sean estas las encargadas de implementar un proyecto o componente proyecto en torno al proyecto extractivo.

1.1. Los tres actores involucrados con las actividades extractivas

1.1.1. Empresas extractivas

El término industria extractiva se refiere a todas las empresas – públicas o privadas – que tienen como objetivo extraer recursos naturales⁶. También incluye empresas prestadoras de servicios directamente relacionados con el proceso de extracción (por ejemplo, empresas que suministran torres de perforación). A su vez, excluye a todas las empresas relacionadas con la comercialización, sean estos los administradores de ductos, buques, gasolineras, etc. En el contexto de esta publicación técnica, no se incluye a la minería artesanal y de pequeña escala.

Las empresas extractivas operan en las zonas de periferia del mundo, cotizan en los mercados de valores internacionales, emplean tecnologías de punta, e interactúan localmente con los gobiernos y comunidades. A nivel mundial, las empresas extractivas asociadas en su mayoría en gremios globales, vienen impulsando un conjunto de iniciativas para fortalecer su relacionamiento con las comunidades locales. La industria minera cuenta con el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) que lidera el campo de la responsabilidad social en el sector⁷. Es una organización conformada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al desarrollo sustentable. ICMM, fundada en 2001, reúne a 23 de las empresas de minería y metales líderes en el mundo, así como 34 asociaciones regionales, nacionales y de *commodities*. Dichas empresas y asociaciones se comprometen a mejorar su rendimiento en el desarrollo sostenible y la producción responsable de los recursos de minerales y metales que se necesita a nivel social⁸.

Igualmente, la industria hidrocarburífera, cuenta con la "International Association of Oil & Gas Producers" fundada en 1999 como la voz de la industria líder global⁹. Los miembros de la asociación producen más de un tercio del petróleo y gas que consume el mundo. La asociación opera apoyando a los reguladores de la industria para mejorar la seguridad y el desempeño ambiental y social. Es también un espacio único donde los miembros de la asociación intercambian conocimientos y buenas prácticas para mejorar la salud, la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social¹⁰.



Para las industrias, la presencia de los gobiernos con regulaciones claras y el relacionamiento efectivo con la población local son elementos claves para la inclusión de los interesados en el mejor éxito de las operaciones. La experiencia ha enseñado que las empresas buscan un proceso continuo de relacionamiento con las comunidades locales, en miras a construir confianza y tener un apoyo de la mayoría de la población para el avance del proyecto extractivo. Existe una tendencia creciente por la que las empresas consideran a la población como un aliado potencial para la implementación del proyecto, y con la cual es necesario construir confianza, desarrollar vías de comunicación efectiva y acordar normas de un relacionamiento que implique resultados e impactos positivos para todos los actores involucrados¹¹.

Gracias a los resultados del presente diagnóstico pudo constatararse que la mayoría de las empresas fomentan una interacción con las comunidades que va más allá de compartir informaciones o mantener diálogos informales y promueven y elaboran planes de relacionamiento que ayudan a minimizar el impacto negativo y aumentan las oportunidades económicas y sociales que se abren con el proyecto extractivo. En esta línea y fuera del nivel comunitario, la sociedad civil se ha constituido en una masa crítica que junto a empresas responsables han impulsado y adherido a principios voluntarios de derechos humanos y negocios¹², cumpliendo a una misma vez con el respeto y promoción de otros derechos sociales y económicos¹³.

Se ha relevado también que existe un interés en promover a las empresas locales mediante su vinculación a la industria extractiva como proveedores de bienes y servicios. De esta manera se fomenta el fortalecimiento de la economía local, con el impulso del sector extractivo, constituyéndose en un interés compartido con el gobierno¹⁴.



En una misma línea, el diagnóstico ha arrojado evidencia, que las industrias, gestionan el relacionamiento con las comunidades y asignan recursos humanos y técnicos¹⁵. Por otro lado, las empresas que se dedican a actividades de exploración en la primera fase del proyecto extractivo suelen no tener los recursos económicos para desarrollar procesos de colaboración y alianzas por requerir de una planificación e inversión de recursos humanos y financieros más importantes, por lo que las acciones de información y diálogos iniciales son decisivas. En otro orden, algunos proyectos en fase de explotación no cuentan con recursos humanos y financieros preasignados para un relacionamiento empresa-comunidad eficiente. Algunas empresas al no contar con una planificación para su relacionamiento pueden fallar en comunicar las oportunidades y los límites de su accionar¹⁶.

Durante la implementación del proyecto, el gobierno –nacional y local- y la empresa se encuentran en una situación de colaboración necesaria y tienen roles complementarios en el relacionamiento con la comunidad. No obstante, no siempre los roles respectivos están claros y no en todos los casos existen las capacidades necesarias para cumplir con dichos roles¹⁷.

A lo largo del diagnóstico se ha comprobado que el relacionamiento en el sector extractivo se ha visto impulsado por avances importantes en el diseño y la implementación de principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Según el ICCM, las empresas han mejorado sus prácticas en aspectos como transparencia, derechos humanos y ambiente y buscan la forma de contribuir a un desarrollo sostenible a nivel país en los territorios donde operan¹⁸. Muchas empresas extractivas incluyen en su política de RSE programas de promoción de capacidades productivas, como también programas de salud, mejoramiento de infraestructura local y de educación formal¹⁹.

1.1.2. Gobierno

Los gobiernos nacionales de la región²⁰, sin distinción en cuanto a su orientación partidaria, han implementado políticas para la captación de inversiones extranjeras directas para proyectos que incluyen a las industrias extractivas²¹. Los altos precios de las materias primas han aumentado los ingresos fiscales de los países en América Latina y el Caribe y han incrementado la inversión y la actividad económica. Algunos gobiernos en la región ahorraron una porción de los ingresos y otros usaron dichas ganancias para incrementar el gasto fiscal. Es por eso que la reducción de los precios a finales de 2008 y con más fuerza entre 2012 y 2013 ha impactado de manera diferente en el desarrollo de los países²².

El auge de los precios de las materias primas ha tenido sus impactos en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media en la región²³. El sector extractivo también ha tenido efectos positivos en el empleo; no obstante, en comparación con el total de la Población Económicamente Activa (PEA) los aportes son relativamente modestos. En los países seleccionados para el diagnóstico, el porcentaje del empleo del sector extractivo frente a la PEA es de alrededor el 1% con excepción de Chile donde supera el 2%²⁴.

Los gobiernos buscan adaptar su marco institucional y legal para seguir captando ingresos a través del sector extractivo. La caída de los precios de los recursos mineros y petroleros a partir de 2013 ha llevado a los gobiernos nacionales a crear marcos normativos atractivos que aseguren la estabilidad económica y jurídica de las inversiones en el sector, lo que frecuentemente plantea dilemas para el equilibrio en su rol de regulador de las actividades extractivas y garante de los derechos humanos y recursos naturales²⁵.



Los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas, han fortalecido sus sistemas democráticos e institucionales, han gestionado eficientemente la macroeconomía y han implementado políticas sociales incluyentes con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad. Aun así, el fin del boom de las materias primas ha develado problemas estructurales, en varios países de la región, referidos a asuntos fiscales e institucionales, así como a otros de tipo social, político y económico²⁶.

Los gobiernos nacionales crean el marco normativo e institucional bajo el cual se desarrolla el relacionamiento entre empresa y población local. Especial atención merece la consulta a Pueblos Indígenas considerada en marcos legales mediante la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo²⁷. Perú es el único país del estudio en el cual la consulta está reglamentada por una ley, mientras que en Chile, Colombia y México existen normas legales a nivel de decretos para este fin²⁸.

En otro orden y respecto al nivel de acceso a información también se encontró que está fuertemente regulado. En todos los países existen normas legales que facilitan el acceso a información de manera general, y en las leyes ambientales se especifica el acceso a informaciones sobre el estado de la naturaleza. La elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, incorporan en muchos casos derechos importantes para la población local como el acceso a información, a la consulta y otras formas de relacionamiento de actores²⁹.

Respecto al marco institucional del sector extractivo el gobierno nacional está conformado por diferentes ministerios que no necesariamente comparten las mismas prioridades, aunque su funcionamiento se rige por unos lineamientos generales de política pública. En todos los países del diagnóstico son los ministerios de minería y energía quienes diseñan las políticas para el sector extractivo y controlan el cumplimiento de los mismos³⁰. Por otra parte, existen los ministerios que velan por el ambiente y son los encargados de la aprobación de la licencia ambiental. Según cada país, intervienen otros ministerios en el relacionamiento con la población local. Por ejemplo, en Chile es el Ministerio de Desarrollo Social quien a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena coordina la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las comunidades indígenas³¹. En cambio, el Ministerio de Interior de Colombia lidera la interlocución con las comunidades locales. En Perú, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad apareció como un ente de coordinación para el acercamiento entre los diversos actores, muy centrado en las industrias extractivas, aunque ha perdido su rol en los últimos años³².

Aparte del poder ejecutivo, en los países que fueron analizados en el diagnóstico existen otros actores estatales a nivel nacional que intervienen en el relacionamiento entre empresa, comunidad y Estado en el sector extractivo. La Defensoría de Pueblo actúa como garante de los Derechos Humanos y en algunos países como Perú también es un promotor importante de diálogos a nivel local. En México, es la empresa estatal PEMEX quien diseña las políticas de relacionamiento en el sector petrolero. La Corte Constitucional de Colombia, frente a la ausencia de una ley que regula la consulta previa,

ha contribuido a darle cuerpo a esta norma internacional³³. En resumen, intervienen una serie de actores nacionales estatales en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Si bien este accionar cubre posibles vacíos regulatorios, esto también aumenta el riesgo de una falta de coordinación entre las diferentes instancias por un lado y entre estas y otros actores como empresas y comunidades por el otro³⁴.

El diagnóstico también encontró que la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se vería beneficiada con un nivel más alto de coordinación y comunicación necesario para acordar estándares y condiciones para la implementación de proyectos extractivos³⁵. Mientras que las competencias sobre el sector extractivo son centralizadas en el gobierno nacional, los gobiernos locales juegan un rol fundamental como representantes e interlocutores de la población local.

Las posibilidades de relacionamiento con los gobiernos locales dependen de sus perspectivas y políticas frente al sector extractivo. El diagnóstico muestra que, por ejemplo, en Argentina existen gobiernos provinciales con normativas favorables para el desarrollo del sector extractivo responsable mientras que otros siete gobiernos provinciales del mismo país han dictado leyes

que prohíben las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto o aquellas que usen sustancias químicas tales como el cianuro en sus procesos³⁶. En Colombia, hasta mediados de 2017 los Concejos Municipales de cinco municipios colombianos han aprobado consultas populares en torno a proyectos extractivos, y en todas las consultas la población ha votado en contra de estos proyectos³⁷.

Los gobiernos locales no solamente son interlocutores importantes en procesos de diálogo y colaboración, sino también juegan un rol central para que los recursos provenientes del sector extractivo sean invertidos de manera efectiva en obras que benefician a las comunidades aledañas al proyecto. Dependiendo del país, hasta 50% de los ingresos fiscales son distribuidos a los gobiernos locales, siendo Chile el país en el cual más se centralizan los ingresos y Colombia y Perú los países con mayor proporción de recursos descentralizados³⁸. Una condición importante para que los recursos aporten al



El diagnóstico evidencia que la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se vería beneficiada con un nivel más alto de coordinación y comunicación necesario para acordar estándares y condiciones para la implementación de proyectos extractivos.

desarrollo local es la capacidad de los gobiernos subnacionales para coordinar la inversión y efectuarla de manera eficiente. Los recursos constituyen una oportunidad para el desarrollo y una transformación de las dinámicas y economías locales, siempre y cuando en los territorios estén las capacidades instaladas para poder aprovechar esta oportunidad³⁹.

El diagnóstico muestra que la coordinación entre gobiernos de diferentes niveles, industrias extractivas y sociedad civil aumenta las oportunidades para que los recursos provenientes del sector extractivo contribuyan a un desarrollo local⁴⁰. Por ejemplo, en Argentina los tres sectores conformaron una la Agencia de Desarrollo a nivel local que contribuyó a que la economía local basada en la producción de lana, que atravesaba una fuerte crisis, se recuperara y generara alternativas productivas. La empresa minera que operaba en la zona impulsó la creación de la Agencia, participó activamente en ella, y financió algunos proyectos priorizados por la misma. Otro de los ejemplos es la Mesa de Buenos Vecinos que reúne a los tres actores en un municipio en Chile y orienta la inversión del sector extractivo hacia nuevas opciones económicas de desarrollo⁴¹.

Para los gobiernos locales, es de suma importancia que la inversión de los recursos se oriente a un plan de desarrollo del territorio y a un proceso de ordenamiento territorial, posibilitando de esta manera que los recursos sean destinados a las obras de mayor relevancia para los actores locales y respetando la planificación del gobierno local en lo que se refiere a sus posibilidades ambientales, económicas y sociales. Según esta perspectiva, el sector extractivo debería ser “un invitado en este proceso”⁴², que se suma y agrega valor a ese plan de desarrollo consensuado entre los grupos poblacionales y basado en la realidad del territorio.

En todos los niveles de gobierno, sobre todo en países con poca tradición extractiva, existe demanda para más capacitación y formación en temas relacionados con el sector. A nivel de los gobiernos locales se requiere la contratación de más técnicos especializados en estos temas. Un mayor conocimiento del sector extractivo facilitará una negociación más equitativa entre gobierno local y empresa extractiva y ayudará a consolidar y mejorar las prácticas de relacionamiento, lo que a su vez resultará en obtener más beneficios para la población local⁴³.





1.1.3. Sociedad Civil

La sociedad civil está conformada por una amplia gama de organizaciones y grupos humanos sin fines de lucro que representan sectores e intereses sociales, culturales y étnicos. Su radio de acción puede estar tanto a nivel rural como urbano, local, regional o internacional. A nivel nacional, se encuentran fundaciones, grupos profesionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), academia, movimientos sociales, confederaciones de pueblos indígenas, iglesias, o fundaciones de las empresas extractivas que financian proyectos de desarrollo, y sindicatos. A nivel local, actúan comunidades, organizaciones comunitarias, asociaciones, grupos indígenas y grupos afrodescendientes. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pueden ser formales (debidamente registradas en sus respectivos países) o informales (agrupaciones no registradas oficialmente).

La heterogeneidad de la sociedad civil se refleja también en los diferentes roles que asumen sus organizaciones en el relacionamiento con los sectores privado y público en torno al sector extractivo. Los diagnósticos de todos los países seleccionados reportan una polarización de la sociedad entre opositores y partidarios en torno al sector extractivo. Pero también reportan una diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo que difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

La diversidad de posiciones y roles de la sociedad civil frente al sector extractivo difícilmente se deja encerrar en un simple “sí o no” a la actividad extractiva.

Por un lado, en los países analizados existen OSC que crean y fortalecen espacios de relacionamiento entre empresas, Estado y las mismas comunidades y facilitan la comunicación entre los tres actores a nivel nacional y local. Por otro lado, existen OSC que desde una perspectiva crítica buscan incidir en las políticas públicas y generan información para contribuir a que las actividades extractivas cumplan con los derechos de las comunidades y estándares ambientales y sociales. En tercer lugar, se encuentra una serie de OSC que se oponen a la actividad extractiva incondicionalmente y fomentan y acompañan acciones de resistencia de la población local.

El diagnóstico relevó que, en Argentina, Chile y México, las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en

torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos. Generalmente, las universidades gozan de legitimidad ya que son consideradas como instancias con alto grado de saber técnico por ende guiados por este y percibidos en un rol neutral. Un ejemplo es el Programa de Negociación, Mediación y Diálogo (*Prodiálogo*) del Centro de Educación y Docencia Económicas (CIDE), una de las universidades con más prestigio en México que organiza foros y talleres multisectoriales para promover el diálogo en torno al sector extractivo⁴⁴.



Las universidades cumplen un rol importante no solamente en las áreas de formación académica, investigación y transferencia de conocimiento en torno a las actividades extractivas, sino también en la construcción de puentes entre actores con intereses opuestos.

Otros actores esenciales, son las comunidades aledañas a los proyectos extractivos como actores con rol de decisión. Las empresas requieren la licencia social lo que implica un cierto grado de consentimiento de las comunidades para poder desarrollar su proyecto.

El presente diagnóstico recoge casos en los que las comunidades aledañas a proyectos extractivos los consideran como oportunidades de desarrollo y están dispuestas a participar en un relacionamiento con la empresa para lograr resultados concretos y tangibles. En estos procesos, las comunidades se han comprometido en un respeto a sus propias visiones de desarrollo y se relacionan con las empresas sobre la base del cumplimiento de esa visión. También, se comprometen con el gobierno nacional para contar con su presencia institucional en el territorio y la garantía del cumplimiento de sus derechos.

El diagnóstico muestra la evolución del relacionamiento respecto a la inversión de recursos en territorios ancestrales. Muchas de las buenas prácticas reportan el fortalecimiento de asambleas comunitarias y otros mecanismos de toma de decisión tradicionales mediante la presencia de la empresa en estos espacios para proporcionar la información y buscar el consentimiento de las organizaciones indígenas. En Colombia, el enfoque intercultural del relacionamiento de la empresa Cerrejón con un resguardo del pueblo Wayuú incluía el respeto a su cosmovisión, el uso del idioma Wayuú y la integración de autoridades indígenas tradicionales en la comisión de negociación. De esta manera, se respondió a las demandas de los pueblos indígenas por participación y autodeterminación, entendida como derecho a poseer, controlar, manejar y desarrollar el territorio⁴⁵.

1.2. Los costos de los conflictos

Un relacionamiento deficiente donde las quejas y las preocupaciones de la comunidad se acumulan sin resolución durante largos periodos de tiempo causa e intensifica conflictos que a su vez generan costos para la empresa, Estado y comunidades.

Un estudio que analiza los costos para las comunidades de seis proyectos de inversión de gran escala (dos de agroindustria, dos de energía, y dos de minería) encuentra los siguientes tipos de costos que generan los conflictos a nivel comunitario⁴⁶.

1. Financiamiento del movimiento opositor (honorarios de dirigentes, campañas mediáticas y publicitarias contra el proyecto, redes sociales).
2. Financiamiento de asesorías legales que permitan judicializar los proyectos.
3. Financiamiento de estudios técnicos para contrastar informes de la empresa.
4. Financiamiento de traslados para las movilizaciones, reuniones informativas, visitas a autoridades políticas.
5. Depreciación de viviendas y actividades económicas por habitar próximos al proyecto y asumir impactos ambientales.
6. Fractura del tejido social, en tanto los conflictos generan efectos psicológicos y emocionales, desconfianza, competitividad y descalificaciones entre los propios habitantes.

Para el Estado, el mismo estudio indica los gastos relacionados con el encarecimiento del proceso de licenciamiento ambiental y con eventuales juicios y peritajes. Adicionalmente, el Estado tiene costos de personal para enfrentar los conflictos, para policía y militares y debe asumir también precios políticos. El país en general puede perder productividad e ingresos, competitividad e inversiones extranjeras⁴⁷.





El cálculo de los precios de los conflictos para las empresas resulta de la diferencia entre los gastos para la prevención y el abordaje de los conflictos (relacionados con la seguridad, contratación de personal especializado, capacitación del personal, entre otros) y los costos por los resultados del conflicto (modificaciones del proyecto, daños materiales, pérdida de productividad, reputación, entre otros)⁴⁸.

Mención aparte merecen los costos derivados de la mala reputación generada por un relacionamiento deficiente que dificulta la búsqueda de nuevo capital y los auspicios de inicio de una operación en un nuevo país⁴⁹.

Según una consulta realizada por el Fraser Institute, 36% de las empresas mineras encuestadas afirmó que la oposición pública a la minería ha afectado negativamente el proceso de autorización por parte del gobierno, resultando en demoras o rechazos de los permisos. La mayoría expresó que los argumentos de la oposición al sector extractivo fueron ambientales o de derechos de pueblos ancestrales⁵⁰. Por otro lado el BID, señala que de un total de 200 proyectos de infraestructura que se enfrentaron con algún tipo de conflicto, 36 fueron suspendidos debido a los conflictos, 162 enfrentaron retrasos y 116 sobrecostos⁵¹.



Según un estudio de la organización BDO International, la mayor preocupación para los ejecutivos internacionales mineros son los retrasos existentes y potenciales de los proyectos mineros. En una encuesta, ejecutivos financieros de alto nivel de Estados Unidos, Sudáfrica, Reino Unido, Australia y Canadá expresaron sus inquietudes acerca del acceso a capital y créditos durante 2013, principalmente por las interrupciones observadas en diversos proyectos mineros⁵².

En 2008, un análisis de 190 proyectos de las empresas más importantes del sector petrolero arrojó como resultado que el tiempo hasta el inicio de la operación casi se había duplicado respecto de la década anterior. La razón fue el incremento de los costos. Un análisis más detallado mostró que los riesgos no técnicos constituían 50% del total de los riesgos y que entre este 50%, el riesgo más significativo fue el relacionamiento con otros actores sociales⁵³. Otro estudio de 19 empresas mineras de extracción de oro encontró que dos terceras partes de su valoración en el mercado fueron resultados de sus prácticas de relacionamiento con actores clave y solamente una tercera parte fue en función del valor del oro en el terreno⁵⁴.

De lo anterior se desprende la perspectiva de riesgos, donde los costos de los conflictos también señalan la necesidad de una planificación oportuna en el relacionamiento entre empresa, Estado y sociedad civil. Este relacionamiento debe atender y equilibrar la diversidad de necesidades e intereses de todos los actores y así permitir un clima mejorado de inversión y el logro de beneficios comunes para todas las partes involucradas.

2. BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONAMIENTO ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL



A continuación, se detallan los hallazgos de las buenas prácticas de relacionamiento identificadas y validadas en República Dominicana. El análisis de cada país se inicia con un cuadro resumen del contexto, buenas prácticas, mapeo de actores y marco legal. Posteriormente, se describen las buenas prácticas con más detalles, las partes involucradas y el marco legal en el cual se insertan dichas buenas prácticas. Al final del documento, se presentan las conclusiones y recomendaciones principales.





2.7. REPÚBLICA DOMINICANA

Cristina Thomen Ginebra, Organismo Latinoamericano de Minería:
cthomen@gmail.com

2.7.1. Cuadro de Resumen

Contexto



Económico: en la República Dominicana, no existen actividades de petróleo o gas. La actividad minera ha crecido significativamente²²¹. El porcentaje respecto al Producto Interno Bruto pasó de 0,4% en 2010 a 1,9% en 2016²²². En 2016, la exportación de minerales constituyó 18,13% de las exportaciones totales²²³. El oro aportó 76% del total de las exportaciones de minerales. Las provincias donde la producción minera ha tenido un impacto significativo, tanto en creación de riqueza como generación de empleos, han sido Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Pedernales. Aunque la Ley Minera establece impuestos y regalías para el sector, las cuatro compañías mineras grandes que operan en el país tienen contratos especiales. Está previsto un impuesto de 5% de los beneficios netos de las empresas para los municipios (Ley 64-00), pero no todas las empresas cumplen con eso a cabalidad. El sector de minería formal metálica²²⁴ crea 9.199 empleos directos y 25.760 indirectos. El porcentaje de empleo de la industria extractiva es de 0,21%.

Social: en la República Dominicana existen tensiones entre la industria y la sociedad civil sobre la actividad minera y también grandes retos en lo social y ambiental. Estas tensiones y retos se presentan por la necesidad de desarrollar políticas que aseguren la sostenibilidad del sector. Los dos retos más importantes, la gobernanza y la implementación y seguimiento de la licencia ambiental, tienen espacio para el desarrollo, sin olvidar también el hecho de que se debe validar la opinión de la sociedad civil a través de la licencia social.

Buenas prácticas



Planes de Desarrollo Municipales: (2009 - 2017, Diálogo/Consulta/ Colaboración/ Alianza). La empresa Barrick-Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) impulsó mesas de trabajo multisectoriales en los municipios cercanos a la mina, como antesala a un proceso de elaboración de Planes de Desarrollo Municipales entre los diferentes sectores de las municipalidades y su respectiva aprobación por plebiscito el 3 de mayo de 2009. Hoy en día aún siguen vigentes, siendo la guía del desarrollo social y económico de cada municipio.

Incubadora de Empresas Cibao Sur: (2011 - 2017, Consulta/Colaboración/Alianza). Es el fruto de una alianza público-privada diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores de la Franja Oriental del Cibao Sur, a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales tales como estudios de mercado, análisis de procesos, asesorías legales y financieras. La incubadora responde a un plan de desarrollo elaborado de manera participativa y apoyado por la empresa PVDC.

Productos Candiver: (2003 - 2017, Alianza). Es una pequeña fábrica de productos de limpieza, medicinales y aseo personal, formada en diciembre de 2003 por un grupo de mujeres de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez. En sus inicios se capacitaron a 22 mujeres en elaboración de productos químicos, con recursos propios, quienes

Mapa de Actores



a su vez se encargaban de promover y vender los productos. En 2009, Barrick-Pueblo Viejo Dominicana (PVDC) hizo contacto con Candiver y les apoyó en temas de financiamiento, capacitación y comercialización. En 2017, Candiver tuvo presencia en más de 75 comunidades y un grupo de 300 vendedores que llevan, distribuyen y re-venden los productos al detalle.

Mesas Redondas Comunitarias: (2013 - 2017, Diálogo/Colaboración). Con la iniciativa de la empresa Falcondo surgen las mesas redondas comunitarias como organismos de planificación y comunicación para lograr un relacionamiento comunitario directo con las 9 comunidades (63.700 habitantes) que habitan alrededor de la mina. Cada mesa redonda ha sido debidamente incorporada bajo la Ley para la Regulación y Fomento de la Asociaciones Sin Fines de Lucro (ley 122-05) y representa a la comunidad en diálogos con actores externos.

Apadrinamiento de Escuelas: (1989 - 2015, Alianza). El fin de este programa, ejecutado por la Fundación de la empresa Falcondo, es apoyar a escuelas públicas con capacitaciones a los maestros y responder a las necesidades que tengan el plantel escolar, incluyendo además un programa de alfabetización de adultos. El programa implicó el involucramiento del Ministerio de Educación y la sociedad civil a través de las asociaciones de padres y juntas de vecinos de las escuelas. Hasta 2016, 132 centros educativos participaron con más de 75.000 estudiantes que representan más del 70% de la población estudiantil de las provincias Monseñor Nouel y La Vega.

En el país, operan cuatro empresas mineras grandes, Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), Falconbridge Dominicana (Falcondo)²²⁵, Corporación Minera Dominicana (Cormidom) y Las Lagunas Ltd. Como gremio existe la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) que agrupa las empresas metálicas, no metálicas y de servicios.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), creado en 2013, establece las políticas mineras. La Dirección General de Minería (DGM) es un ente adscrito al MEM y encargado del control de la actividad extractiva. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) aplica las regulaciones ambientales.

En la sociedad civil se destacan: la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como también la Comisión Ambiental, perteneciente a la misma universidad y con una posición crítica a la industria minera. Es importante incluir el Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE) que agrupa más de 137 organizaciones populares, gremios, asociaciones campesinas y organizaciones no gubernamentales, formado en 2015 resultado de la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI). La Comisión Nacional EITI está jugando un rol importante como iniciador de un diálogo multi-actor.

Como actores locales están las mesas redondas comunitarias en el municipio Bonao, el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR), el Centro de Formación de Mujeres Organizadas María Liberadora (CEFOMOMALI) cooperativa que agrupa más de 3.000 mujeres en Cotuí, y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) única universidad en el país que ofrece la carrera de geología y minas.

Marco Legal y Regulatorio



El sector minero opera bajo la Ley Minera 146-71 y las disposiciones y regulaciones que ejerce el Ministerio de Energía y Minas. No obstante, las principales actividades mineras se rigen bajo contratos especiales con el Estado.

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), sus reglamentos y procedimientos, establecen las líneas de acción del sector, incluyendo la consulta pública como parte de la obtención de la licencia ambiental.

La Ley del Distrito Nacional y los Municipios (2007)²²⁶ establece el derecho a plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre proyectos de infraestructura (art. 234). También existe la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, por lo que los documentos y contratos entre el gobierno y la industria tienen acceso público (2004)²²⁷.

2.7.2. Introducción

La industria minera de la República Dominicana es relativamente nueva, aunque las exploraciones de minerales y de hidrocarburos se vienen realizando desde inicios del siglo pasado. Es a partir de los años 70 que se impulsa la minería mediante dos grandes proyectos: la mina de níquel de Falcondo y la mina de oro y plata de Pueblo Viejo²²⁸.

La minería se ha convertido en uno de los sectores clave del desarrollo económico de la República Dominicana. De acuerdo al ranking de empresas de la Dirección General de Impuestos Internos, el sector de minas y canteras ocupaba el 45% del total de impuestos recolectados por el gobierno por encima del sector comunicaciones con un 19% en 2015²²⁹. Estos datos reflejan un incremento importante en 2016 cuando esta cifra subió a un 51%²³⁰. Estos porcentajes son básicamente sustentados por las actividades de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC).

Es a partir de finales de la primera década del milenio, que se empezaron a implementar nuevas iniciativas de relacionamiento entre los actores²³¹. Estas iniciativas se perciben en los entornos más cercanos a las minas y no son muy conocidas a nivel nacional. Las nuevas formas de relacionamiento impulsadas mayormente por PVDC en la provincia Sánchez Ramírez²³² han contribuido a un mayor nivel de educación de las poblaciones con programas de alfabetización de adultos, fortalecimiento del sistema educativo primario, capacitaciones técnicas en diversas áreas, tanto para servir a las minas directa o indirectamente, como para el desarrollo de emprendedores en las provincias mineras. Igualmente, se han desarrollado programas que fomentan la educación ambiental, la mejoría en los cultivos, el manejo de bosques y el ecoturismo, creando nuevas fuentes de empleo y fomentando el encadenamiento productivo. El aporte en responsabilidad social realizado por PVDC entre 2008 y 2014 superó los 25 millones de dólares en áreas educativas, emprendimiento, salud preventiva, infraestructura, autoempleo y microempresas y medioambiente, impactando más de 30 comunidades y alrededor de unas 66.500 personas²³³.

Los proyectos de responsabilidad social, que empezaron a desarrollarse en la última década (PVDC 2008, Cormidom 2010, Las Lagunas 2011) en las provincias mineras, han generado cambios para un mejor entendimiento del sector y una

actitud más abierta hacia el diálogo. Ejemplos de estos proyectos son los incluidos en este informe. En el caso de la provincia Sánchez Ramírez, el rol del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR)²³⁴ que fue formado para el manejo de los fondos generados por las mineras, ha sido importante para que la población logre entender qué es el Estado quién debe distribuir las rentas mineras pagadas por las operaciones de las empresas PVDC y Las Lagunas Ltd. a los municipios producto de 5% que establece la Ley 64-00. El FOMISAR es la institución que distribuye el dinero que proviene de la actividad extractiva para financiar los planes de desarrollo municipales.

2.7.3. Buenas prácticas

En la República Dominicana, se han identificado diversas buenas prácticas. Se han escogido cinco que abarcan todos los niveles de relacionamiento. La mayoría se encuentra a nivel de alianza. En estos casos, el relacionamiento parte de la empresa y tiene como objetivo la inversión de los recursos de manera coordinada con la sociedad civil y muchas veces con las autoridades locales. A nivel de la consulta, se analiza un plebiscito sobre planes de desarrollo que han ayudado a priorizar estas inversiones.

Las buenas prácticas son:

2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales

2.7.3.2. Incubadora de Empresas Cibao Sur

2.7.3.3. Productos Candiver

2.7.3.4. Mesas Redondas Comunitarias

2.7.3.5. Apadrinamiento de Escuelas



2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



DURACIÓN

2008 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Barrick Pueblo Viejo Dominicana (PVDC), Fundación Falcondo.

Federación Dominicana de Municipios, Embajada de Canadá, Junta Central Electoral de la República Dominicana, gobiernos locales, oficinas sectoriales del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Instituto Agrario de la República Dominicana.

Representantes de las comunidades de Fantino y Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez y Maimón de la provincia Monseñor Nouel.



DESCRIPCIÓN

Explotación de oro: PVDC tiene un contrato de arrendamiento con el Estado dominicano para la operación de la mina de oro de Pueblo Viejo. Esta mina fue operada inicialmente desde 1973 por la empresa Rosario Resources LTD. En 1979, fue comprada por el gobierno dominicano y cerrada en 1999 cuando se terminaron los depósitos de óxido. En 2001, fue licitada y adquirida por la empresa Placer Dome. En 2006, PVDC adquirió Placer Dome y consecuentemente la concesión de la mina de Pueblo Viejo. Pueblo Viejo es una de las minas de oro más grandes en el mundo. La producción para 2016 alcanzó 1.167 millones de onzas de oro. Cuenta con unas reservas probadas de unos 13,1 millones de onzas de oro, más alrededor de unos 78,4 millones de onzas de plata y 334,6 millones de libras de cobre contenidas en la reserva de minerales²³⁵.

Plebiscito como norma: la Ley Municipal 176-07 contempla la figura del plebiscito como herramienta de consenso y gestión para las municipalidades. En 2008, PVDC detectó la necesidad de trabajar con la población de los municipios cercanos al área de la mina, para prepararlos para recibir el 5% de los beneficios de la empresa según establece la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aprovechando la figura del plebiscito, en cada municipio se organizaron mesas redondas de trabajos con 4 ejes principales²³⁶, consensuados con su población, que derivó en el plebiscito celebrado el 3 de mayo de 2009, donde la población votó aprobando los planes de desarrollo de cada municipio.

Alianza con gobiernos locales: para llevar adelante estas mesas, PVDC estableció una alianza con líderes del gobierno local y la sociedad civil que incluyó la validación de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo a través de los Consejos Municipales en Maimón, Fantino y Cotuí.



Capacitación previa: primero, se preparó el equipo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de PVDC mediante talleres y reuniones. También, se capacitó a los líderes comunitarios, un total de 60 representantes del gobierno local y de las comunidades, que recibieron entrenamientos en la elaboración de planes de desarrollo.

Información: mediante diferentes vías, que incluyeron la celebración de talleres y reuniones, se informaba a las comunidades sobre el proceso.

Mesas redondas: con estos pasos previos, en cada municipio se organizaron mesas redondas. En las mesas se acordaron 4 ejes principales de trabajo²³⁷: a) Economía, Producción y Empleo; b) Recursos Naturales, Medio Ambiente, Mitigación y Prevención de Riesgos; c) Salud, Deporte, Educación y Cultura; d)

Fortalecimiento Institucional, Ordenamiento Territorial y

Participación Ciudadana. En las mesas redondas se acordaron planes de desarrollo para cada municipio.

Foros de consenso: una vez que hubo resultados de las mesas redondas, se llevaron los resultados a ser consensuados por las comunidades a través de un congreso municipal con un mínimo de 500 participantes por cada municipio.

Plebiscito: en un proceso conjunto entre los municipios, en mayo de 2009, el plebiscito fue celebrado. La población votó aprobando los planes de desarrollo de cada municipio reconocido ante el gobierno central y local y cuyo proceso fue validado por la Junta Central Electoral²³⁸. Fue la primera vez, y única hasta el momento, que en la República Dominicana se celebraba un evento de esta categoría.

Guía de priorización: en este proceso participativo, que involucraba autoridades, sociedad civil y empresa, se generó también una guía que contenía las ideas sobre proyectos a ser realizados en cada territorio para su desarrollo en los próximos 5 años, basados en los 4 ejes de las mesas redondas de trabajo.

Implementación: la implementación de los planes fue apoyada por los Consejos Municipales Económicos y Sociales²³⁹, que se incorporaron a las mesas redondas de cada municipio como organismos reconocidos por el Estado.

Nueva forma de repartición: en 2013²⁴⁰, el contrato de operación de PVDC fue renegociado por el gobierno del presidente Danilo Medina. Como parte de esta negociación el 5% estipulado en la Ley 64-00 pasó a ser recolectado directamente por el gobierno central. Ante esto, ya las comunidades no percibirían directamente estos ingresos. Los aportes serían pasados a las comunidades a través del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez (FOMISAR), que aporta a las municipalidades de acuerdo a los proyectos plasmados en los planes de desarrollo.

Actual: en el presente como parte del programa de responsabilidad corporativa que desarrolla la empresa directamente con las comunidades, todo el accionar de PVDC hacia los proyectos de responsabilidad social está basado en los planes de desarrollo, reconociendo de esta manera como legítimas las solicitudes allí plasmadas para el desarrollo de las mismas.



IMPACTO/ RESULTADO PRINCIPAL

En resumen, parte de los impactos positivos de los proyectos de inversión de PVDC en las comunidades desde 2008 hasta 2017 y con una inversión que sobrepasa los 25 millones de dólares, son:²⁴¹

En educación: dentro del municipio de Cotuí se realizaron planes de alfabetización, nivelación escolar, actualización de maestros, capacitaciones en ciencias y formación de mujeres líderes. Entre estos proyectos se involucraron más de 84 comunidades, más de 3.000 mujeres, unas 20 escuelas cercanas a la mina más de 750 docentes más de 3.900 estudiantes y unos 15 técnicos de la regional del Ministerio de Educación, entre otros proyectos ²⁴². Además, se beneficiaron unas 3.266 personas del programa “Quisqueya Aprende Contigo” lanzado por la presidencia de la República en 56 comunidades. Se trabajó con 59 docentes y 928 estudiantes de 9 escuelas en el programa “Escuela que Transforma” y se ha beneficiado con transporte escolar a más de 950 estudiantes y 80 docentes. Otros programas incluyeron créditos educativos, becas, apoyo a la universidad UTECO, una Computadora por Nino²⁴³.

En lo referente a producción, empleos y medioambiente se establecieron programas a para 18 proyectos con unos 5000 beneficiados. Se implementó el proyecto Forestal Enda-Barrick beneficiando a más de 2.301 familias²⁴⁴, además de proyectos lecheros y crianza de peces en el lago de Hatillo²⁴⁵. Otros proyectos tienen que ver con infraestructura, como electrificación de zonas rurales²⁴⁶, reparación de canales de riego y carreteras y vías.



INNOVACIÓN

En la República Dominicana, las políticas de RSE de las empresas se concentran en el trabajo con y para las comunidades. En este caso fue diferente. La empresa fomentó activamente la articulación entre comunidades y autoridades municipales. Eso permitió impulsar procesos de decisión sobre el desarrollo del territorio de manera conjunta.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación institucionalizada: todos los sectores fueron convocados con derecho a voz y voto y podían expresar sus necesidades. Cada mesa generó informes de resultados que se presentaban en pequeños congresos locales y luego esos resultados se presentaban abiertos a la población lo que llevó finalmente al plebiscito.
- Pertinencia según necesidad: se trabajó en conjunto basado en una visión del territorio buscando proyectos que generaran beneficios compartidos, a largo plazo y sostenibles en el tiempo.
- Sostenibilidad institucional: la sostenibilidad del proceso descansa en la fortaleza alcanzada por la sociedad civil al empoderarse para ser parte integral del proceso, lo que ha permitido que los planes de desarrollo estén vigentes.



ENFOQUES

Enfoque de Género: La alianza ha generado inclusión, empoderamiento y conciencia sobre el territorio creando valor compartido. Durante todo el proceso, la participación activa de los líderes con mayor trayectoria, incluyendo las mujeres, y la integración de jóvenes en la toma de decisiones fue altamente positiva.



LECCIONES APRENDIDAS

Se ganó una visión del territorio y del valor de crear alianzas que generen encadenamientos junto al tomar conciencia de que cada comunidad es responsable de su desarrollo.

El involucramiento de las comunidades y el trabajo en equipo generaron un compromiso con la ejecución del plan, ya que cada persona involucrada lo asumió como suyo. Esto a su vez fortaleció el plan.

Se logró la convivencia entre los que estaban en contra y a favor del proceso sin generar conflictos, sobre todo en comunidades donde generalmente se utilizaba más la protesta que el diálogo. Las capacitaciones, reuniones y talleres facilitaron este nuevo espíritu de diálogo logrando que fueran las comunidades directamente quienes trabajaran en su plan de desarrollo.



VALIDACIÓN

Entrevistas con el departamento de RSE de PVDC y ejecutivos del departamento de relaciones interinstitucionales de PVDC, autoridades provinciales como el gobernador provincial y la alcaldesa, rector de UTECO, representantes de la sociedad civil: CEFORMOMALI, Asociación de Campesinos, proveedores. Visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón.

Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí.

Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.

Ausland, Aaron, 2010: Estudio de Caso - Estableciendo Alianzas para el Desarrollo Local, Cámara Americana de Comercio de la Republica Dominicana: Santo Domingo.

<http://www.fomisar.com/>

<http://www.desarrollomunicipal.org/celebran-en-cotui-fantino-y-maimon-primer-plebiscito-municipal-del-pais/>

<http://elnacional.com.do/diputados-aprobaron-renegociacion-de-contrato-con-barrick-gold/>

2.7.3.2. Incubadora de Empresas Cibao Sur

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



DURACIÓN

2011 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Pueblo Viejo Dominicana Corporation – PVDC

Municipios Piedra Blanca, Maimón, Cevicos, Fantino, Cotuí y Villa La Mata, Secretariado Técnico de la Presidencia, Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial PROINDUSTRIA, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Trabajo, Banco de Ahorro y Crédito de Cotuí, Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Gobierno Provincial.

Cooperativas agrícolas, comunidades campesinas, asociaciones de amas de casas, UTECO



DESCRIPCIÓN

Incubadora como parte del plan de desarrollo: El proyecto de la incubadora fue uno de los proyectos votados y aprobados durante el plebiscito resultado de las mesas redondas del municipio de Cotuí en la formulación de su Plan de Desarrollo²⁴⁷. Como alianza público-privada ha ido creciendo y ofreciendo servicios expandiéndose más allá del municipio que le dio vida.

Fase de consolidación: la incubadora inició su operación en el municipio de Cotuí y las comunidades de la provincia Sánchez Ramírez. En junio de 2011, se consolidó este proyecto al inaugurarse la oficina de incubadora de empresas de la región Cibao Sur. El proyecto recibió el financiamiento de PVDC, que aportó un capital semilla en el primer año de 41.580,00 dólares²⁴⁸. Esta suma se incrementó en el segundo año a 103.950,00 dólares y la empresa creó un fondo de garantía de 62.370,00 dólares. A partir del 4to año, la incubadora empezó a ser autosuficiente en la generación de proyectos emprendedores.

Sus servicios: la incubadora de empresas es el fruto de una alianza público-privada diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores de la Franja Oriental del Cibao Sur, a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales tales como estudios de mercado, análisis de procesos, asesorías legales y financieras y la identificación de oportunidades de negocios.



IMPACTO Y RESULTADO PRINCIPAL

Esta iniciativa impactó la provincia Sánchez Ramírez con una población estimada de 160.000²⁴⁹ habitantes al 2017, que incluye 4 municipios y 10 distritos municipales, además de los municipios de Maimón y Piedra Blanca, pertenecientes a la provincia Monseñor Nouel con 18.000 y 25.000 habitantes respectivamente. Un grupo significativo de jóvenes emprendedores, asociaciones y grupos de cooperativas se ha capacitado en la comprensión, implementación y manejo y conocimiento comercial de proyectos y se ha fomentado el emprendimiento. La incubadora ha ido agradando sus proyectos. Hasta 2017, se han incubado 18 proyectos, algunos ejemplos de ellos son: proyecto Mantas del Coco del grupo de mujeres Unidas De Hatillo; Cría de Peces de la Unión de Pescadores, la iniciativa de plantas medicinales de la Cooperativa COOPSEMUCO²⁵⁰. En 2016 recibieron el Premio Nacional de Excelencia otorgado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)²⁵¹



INNOVACIÓN

Se han formulado planes a través de un programa denominado Emprende Sin Límites (EPSI) para crear fuentes de trabajo para los discapacitados que en el último censo (2010) se determinó más de 8.000 personas en la provincia Sánchez Ramírez. Hay iniciativas para crear una fábrica de trapeadores y otra de ventanas.²⁵²



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: la incubadora beneficia un amplio campo de actores, desde campesinos, estudiantes universitarios, centros de asociación de amas de casa, cooperativas.
- Pertinencia según necesidad: la incubadora ha creado una fuente segura y creciente de empleos. Muchas personas y microempresas que han recibido el acompañamiento de la incubadora y se han convertido en suplidores locales de la PVDC, lo que les garantiza un mínimo de compras periódicas.
- Sostenibilidad financiera: luego de seis años de la implementación del proyecto, la incubadora es autosuficiente y sigue en pleno crecimiento.



ENFOQUES

Enfoque de Género: Para los nuevos proyectos, se está trabajando en la transversalización de género buscando igualdad en términos de recursos y capacitación.



LECCIONES APRENDIDAS

De acuerdo al Director Ejecutivo de la incubadora, la mejor lección aprendida ha sido “incubarnos nosotros mismos”. A pesar de ser la tercera incubadora de empresas en el país, es la primera con el formato de auto sostenibilidad. Han creado su propio fondo a partir de los servicios para incubar los proyectos.



VALIDACIÓN

Entrevistas con personal de la incubadora, PVDC, FOMISAR, alcaldía, UTECO, beneficiarios del programa. Visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://www.diariodominicano.com/dominicana-hoy/2010/12/10/67209/gobierno-y-sector-privado-crean-centro-de-incubacin-de-empresas-para-la-creacin-de-empleos-en-la-franja-oriental-de-la-regin-cibao-sur>

<https://www.listindiario.com/economia/2011/02/11/176966/sectores-publico-y-privado-impulsan-incubadora-de-empresasnbsp>

<http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/oficina-nacional-de-planificacion-y-desarrollo-educativo/Epgy-sanchez-ramirez-2010-2011pdf.pdf>

“Con apoyo de Barrick, microempresas reciben más de RD\$ 4 millones”, Santo Domingo, <http://acento.com.do/2012/economia/21142-con-apoyo-de-barrick-microempresas-reciben-mas-de-rd-4-millones/>

Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia Sánchez Ramírez – Plandesar 2015-2020 2015 – Editado por el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez, Inc. (FOMISAR)

Primera Edición, Sánchez Ramírez, República Dominicana, 2015

2014 - <http://barrickpuebloviejo.do/sostenibilidad/proyecto-incubadora-de-empresas-cibao-sur/2016-10-18/163241.html>

2014 - <https://www.youtube.com/watch?v=lrFJGhtrlow>

<http://www.exsasoluciones.pe/rse-conoce-la-historia-de-exito-de-barrick-pueblo-viejo-en-republica-dominicana/>

2.7.3.3. Productos Candiver

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Alianza



DURACIÓN

2003 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

PVDC, Incubadora de Empresas Cibao Sur,

Municipios de Cotuí, Villa La Mata, Fantino y Cevicos, Embajada de Canadá

Comunidades de Zambrana, Quita Sueno, Platanal, Hernando Alonso, La Cueva.



DESCRIPCIÓN

Explotación de oro: PVDC adquirió la mina en 2006 con la compra de Placer Dome. Sus operaciones son las mayores de la República Dominicana habiendo aportado entre 2010 y junio de 2016 con una inversión de 4.935 millones de dólares²⁵³.

Surge la idea: el Centro de Formación para Mujeres Organizadas "María Liberadora" (CEFOMOMALI) es una organización no gubernamental, enfocada en la formación, promoción y desarrollo de la población más necesitada: organizaciones de mujeres de la zona rural y de barrios marginados de la provincia Sánchez Ramírez. Cuenta con el asesoramiento de las religiosas Hijas de Jesús y la Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples "Uniando Esfuerzo" para incentivar el ahorro cooperativo, préstamos y servicios múltiples. Beneficia a más de 3.000 mujeres, asociadas en 75 organizaciones.

Inicio de la iniciativa: Productos Candiver comenzó en 2003 por iniciativa de Sor Luisa Suarez, religiosa de las Hijas de Jesús y líder comunitaria, quien había participado en un proyecto similar en Bohechío al sur del país. Al inicio se capacitaron a 22 mujeres en la elaboración de productos químicos, con recursos propios. De inmediato, comenzaron a fabricar un galón de cada producto: detergente de lavar, producto de limpieza de pisos, cloro, champú para el pelo, entre otros. Los llevaban a sus casas y a sus barrios y los probaban para ver la efectividad y la reacción de sus vecinos. Ellas mismas adquirieron los productos para poder comprar de nuevo los químicos para la elaboración de nuevos productos.

Apoyo por parte de la empresa minera: en 2009, PVDC por mediación de la Embajada de Canadá, conoció la iniciativa y decidió apoyarla. La empresa ofreció financiamiento para mejorar la calidad de los productos y sus etiquetas. Para esto, se proporcionó un insumo químico y una experta en mercadeo. Se brindó capacitación en administración, finanzas y desarrollo de ventas, en alianza también con la universidad UTECO.

Consolidación y crecimiento: PVDC pasó a asegurarles una compra fija de sus productos de limpieza, para lo cual tuvieron que tomar entrenamientos adicionales y cumplir con las exigencias de seguridad e higiene de la empresa, incluyendo añadir información de seguridad en la etiqueta de los productos, modo de uso, registro industrial y sanitario, entre otros. También PVDC además aportó un vehículo para ayudar con la distribución de los productos que empezaron a ser adquiridos por otros proveedores de la empresa, así como escuelas públicas y privadas. Entre los clientes, también se encuentra un hospital estatal y una clínica privada además de unos 1.500 particulares que utilizan los productos de belleza personal en los salones de belleza o los revenden en sus comunidades.

Estado actual y proyecciones: hoy en día fabrican 16 productos y mujeres de 75 comunidades participan o como productoras o vendedoras de los productos. En su fuerza de ventas tienen registradas 300 vendedoras y en la fábrica trabajan 32 empleadas. El nuevo proyecto para mejorar la producción y distribución es adquirir nuevas máquinas mezcladoras y una máquina llenadora y selladora de pequeñas bolsas plásticas con sus productos para hacer más accesible la venta al por menor.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

El proyecto ha logrado un sitio en la provincia y se percibe como un ejemplo de perseverancia de la mujer campesina. Se han generado pequeños núcleos de emprendedoras que han abierto centros de belleza utilizando y distribuyendo los productos Candiver. Las voces y reclamos de la institución cuando son elevadas son escuchadas y atendidas, convirtiéndose en una institución respetada por todos los ámbitos sociales, el gobierno local y central y las empresas productivas de la región.



INNOVACIÓN

Lo innovador de Candiver es que es una iniciativa netamente de mujeres que elabora productos que no se fabricaban en la zona. A partir de 2009 con el apoyo de PVDC se consolida su posición en la provincia ampliando su gama de productos y en alianza con CEFORMOMALI se crea un centro de apoyo al desarrollo de la mujer con capacitaciones para su desarrollo personal y social.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: se fomenta la participación activa de mujeres contribuyendo a crear una independencia y el empoderamiento de la mujer.
- Pertinencia según necesidad: permite el desarrollo de una nueva industria donde la mujer aprende a ser emprendedora y desarrolladora de un proyecto que extiende su sentido emprendedor en diversas comunidades
- Sostenibilidad financiera: la capacitación se complementa con apoyo económico por parte de PVDC a través de financiamiento directo, adquisición de vehículo para la distribución y apoyo y seguimiento por parte de la empresa PVDC. La iniciativa es auto sustentable.



ENFOQUES

Enfoque de Género: es un proyecto que se dedica al empoderamiento económico y social de mujeres. Fomenta el reconocimiento de la mujer en igualdad de condiciones mediante procesos educativos, la promoción humana y el acompañamiento.



LECCIONES APRENDIDAS

En las entrevistas con varias de las mujeres que forman parte de Candiver hubo una gran coincidencia en que todo lo aprendido para mejorar la calidad de sus productos, los entrenamientos sobre seguridad e higiene, emprendimiento, administración y mercadeo son aplicables no solo para el negocio, sino también para su vida personal, lo que las hace sentir seguras y dispuestas a demostrar que la mujer puede emprender y tener éxito cuando se decide hacerlo. Empezaron con recursos propios muy escasos y hoy son ejemplo de cientos de mujeres en la provincia y el país.



VALIDACIÓN

Entrevistas con presidenta de Candiver, coordinadora de CEFORMOMALI e incubadora de empresas Cibao Sur, UTECO, Departamento de Responsabilidad Social de PVDC, alcaldesa de Cotuí, usuarios de los productos, consultas en la web y prensa, visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

http://w1.barrickpuebloviejo.do/productos_candiver_sinonimo_de_mujeres_empoderadas_de_su_futuro
<https://www.listindiario.com/la-vida/2017/05/26/467505/un-ejemplo-de-empoderamiento-y-superacion>
<http://www.productoscandiver.com/index.html>
<https://ceformomali.jimdo.com/>



2.7.3.4. Mesas Redondas Comunitarias

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Diálogo



Colaboración



DURACIÓN

2013 – 2017



ACTORES PRINCIPALES

Empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo).

Director municipal del Ministerio de Medio Ambiente, director municipal del Ministerio de Agricultura, unidades de atención primaria del Ministerio de Salud y la alcaldía del municipio de Bonao.

Nueve comunidades (Bonaito, Jayaco, Peñaló, Palmarito, El Verde, Caribe, Hato Viejo, Rancho Nuevo y La Minita que forman parte del área de influencia de la mina).



DESCRIPCIÓN

La mina: en 1958, fue otorgada la concesión a la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo) para explotar ferroníquel en la provincia Monseñor Nouel en el centro de la República Dominicana. Inició sus operaciones en 1971. La mina fue cerrada entre 2008 y 2011. La producción reportada de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana es de 38.069 toneladas para el periodo 2010-2015. Actualmente, la mina es operada por Americano Nickel Limited, dueño de Falcondo.

El entorno: el desarrollo de la ciudad de Bonao, capital de la Provincia Monseñor Nouel con una población de 80.258 habitantes,²⁵⁴ ha estado intrínsecamente ligado al desarrollo y crecimiento de la operación de níquel.

Inicio de las mesas redondas comunitarias: como iniciativa de Falcondo surgieron a partir de 2013 las mesas redondas comunitarias para reactivar el relacionamiento después del cierre de la mina en 2011. Inicialmente, se trabajaba con 13 comunidades, pero el relacionamiento se mantuvo solo con las nueve comunidades más cercanas a la mina y planta de operaciones. Estas nueve comunidades conforman una población por encima de los 18.000 habitantes. Las mesas fueron diseñadas como organismos de planificación y comunicación para un relacionamiento comunitario adecuado.

Su estructura de participación: a través de las mesas redondas se desarrolló el relacionamiento con entidades comunitarias donde se concentraban los diferentes grupos sociales legítimos reconocidos por las comunidades (por ejemplo, el síndico, algún representante de la iglesia, las amas de casa, o algún representante de la juventud, por citar algunos). Cada mesa redonda estudió los problemas de la comunidad y cualquier solicitud ante la empresa fue canalizada a través de la misma.

Su frecuencia: cada mesa redonda sesionaba de manera mensual. Además, cada cierto tiempo se celebró una reunión en la cual todas las mesas comunitarias participaban conjuntamente, lo que ha permitido mejorar las relaciones entre las distintas comunidades y promover encadenamientos productivos.

El diálogo para abordar conflictos: como parte de la construcción del diálogo, los participantes tenían el derecho de exponer sus ideas y puntos de vista de manera organizada y las decisiones fueron tomadas por consenso. El diálogo en las mesas redondas ha permitido que esta iniciativa sea una herramienta efectiva de manejo de conflictos. A partir de su implementación, los conflictos por vías de acceso, ruido, contaminación, o falta de empleos se han reducido significativamente.

La institucionalización de las mesas: Cada mesa redonda ha sido debidamente incorporada bajo la Ley para la Regulación y Fomento de la Asociaciones Sin Fines de Lucro (Ley 122-05). Esta ley incentiva la incorporación jurídica de las organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es el de desarrollar actividades de bien social o interés público, fortaleciendo el desarrollo de una sociedad civil plural, democrática y participativa.



IMPACTO Y RESULTADO PRINCIPAL

Las mesas redondas comunitarias han venido a resolver conflictos, quejas y preocupaciones entre la empresa y las comunidades. Un ejemplo es el reclamo por el polvo que se levantaba por el paso de camiones por el cual la empresa implementó un sistema para mojar los caminos antes del tránsito de los camiones. También, entre las propias comunidades se ha mejorado su interrelación, al igual que las relaciones de estas con los gobiernos locales.

La forma de trabajo de las mesas ha logrado crear encadenamientos productivos importantes logrando diversificar la economía local incluyendo el intercambio comercial entre las comunidades entre sí y con otras zonas de la provincia. Un ejemplo se da en la comunidad de Peñaló de unos 200 habitantes, en donde los habitantes desarrollaron un proyecto de apicultura que produce miel para la comunidad. Los productores la venden a las demás comunidades y la empresa la ha conectado con una cooperativa apícola de la vecina provincia de La Vega para comercializar la miel en otras zonas de la región. Otro ejemplo ha sido la creación de la empresa de Coopyuna, una cooperativa para fomentar el ahorro y el financiamiento de proyectos. El centro de internet de Rancho Nuevo les ha permitido acceso al internet a los estudiantes. Además, sirve como centro de comunicación y del cual también se benefician otras comunidades cercanas.

A partir de la integración de las mesas y de su interacción con la empresa se han generado más de 300 empleos comunitarios, lo que representa un 29% del total del empleo de la mina.



INNOVACIÓN

Lograr la integración de todos los sectores de la comunidad ha sido algo innovador. Cada sector está representado y tiene voz y voto por lo que las decisiones son consensuadas. La empresa no recibe ninguna petición si no viene a través de la mesa y esta ha sido debidamente consensuada. Falcondo es la única empresa en la República Dominicana que adoptó esta forma de canalizar solicitudes de empleos, donaciones, ayudas comunitarias, entre otras.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: todos los sectores de la comunidad están representados en las mesas y tienen voz y voto en la toma de decisión.
- Pertinencia según necesidad: es pertinente porque abarca toda la zona de influencia de la operación minera, facilitando el manejo efectivo de conflictos comunitarios.
- Sostenibilidad institucional y financiera: es una iniciativa sostenible al constituirse las mesas en organizaciones no gubernamentales y tener personalidad jurídica. Las mesas han aprendido a administrar apropiadamente los recursos con los que cuentan las comunidades. Estos recursos provienen directamente de la mina o son generados por proyectos de la comunidad. Otra fuente de ingresos son proyectos agroforestales donde participan las comunidades y la mina. Para el 2018 la proyección del aporte del proyecto agroforestal es de US\$ 142,800.00.



ENFOQUES

Enfoque de Género: El rol de la mujer es muy activo y aceptado, de las 9 mesas, 4 son presididas por mujeres. Incluyen también en las mesas jóvenes líderes del proyecto de formación de líderes CRECIENDO, otra iniciativa de Falcondo para ir entrenando jóvenes de las diferentes comunidades en fortalezas técnicas y de liderazgo para que se vayan insertando en los proyectos de las mesas y garantizar el relevo generacional.



LECCIONES APRENDIDAS

Sin planificación no hay comunicación efectiva. La base del diálogo es la construcción de confianza. Se reconoció que las necesidades de las comunidades deben ser escuchadas, valorando su importancia y los derechos de las comunidades.

Las comunidades han entendido que es importante sentarse a establecer prioridades, a planificar cómo se van a desarrollar localmente sin necesariamente depender directamente de la mina. Han obtenido una cierta independencia económica-productiva que ha permitido a las comunidades crecer más allá de su relación con la mina.



VALIDACIÓN

Validado por entrevistas a funcionarios de la empresa y líderes comunitarios, presidentes de las mesas y visitas a varias comunidades.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<http://elcaribe.com.do/2015/12/06/falcondo-incorpora-13-mesas-redondas-para-programas-responsabilidad-social/>
<http://elresplandor.com.do/web/2017/11/29/falcondo-inaugura-nuevo-centro-de-internet-en-comuniad-rancho-nuevo-bonao/>
<https://acento.com.do/2016/economia/8388952-falcondo-asegura-esta-transparentando-ampliando-apoyo-las-poblaciones-vecinas/>

2.7.3.5. Apadrinamiento de Escuelas

NIVEL DE RELACIONAMIENTO



Alianza



DURACIÓN

1989 - 2017



ACTORES PRINCIPALES

Fundación Falcondo, empresa Falcondo

Ministerio de Educación, direcciones regionales y distritales del Ministerio de Educación, Asociación Dominicana de Profesores, gobiernos provinciales Asociaciones de padres y juntas de vecinos, Barna Business School



DESCRIPCIÓN

La mina: véase descripción en Mesas Redondas Comunitarias.

Responsabilidad Social Empresarial: La Fundación Falcondo surgió en 1989 como el brazo de responsabilidad social de la empresa Falcondo. Las áreas escogidas para realizar los programas de responsabilidad social fueron educación, salud preventiva, recursos naturales y desarrollo comunitario. La Fundación operó en Santo Domingo hasta finales de 2015 y luego su oficina fue trasladada a Bonao, año en que la empresa pasó de manos a Americano Nickel.

Inversión en educación: el área de educación recibió el 53% de la inversión total de la Fundación con un monto total 6' 974.552 dólares, siendo su principal programa el Apadrinamiento de Centros Educativos²⁵⁵. Este programa se convirtió en un modelo de participación del sector privado en la educación pública mediante alianza con el Ministerio de Educación y reconocido por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Interamericana para el Desarrollo.



Las contribuciones: las contribuciones a la educación ejecutadas a través de este programa fueron construcción y remozamiento de planteles escolares, equipamiento de mobiliario escolar y material didáctico, fortalecimiento de bibliotecas, programas de alfabetización, programas de créditos educativos y becas a estudiantes de escasos recursos, capacitación de maestros, alianzas y apoyo con las direcciones regionales y distritales de educación y con la Asociación Dominicana de Profesores.

Área de influencia: abarcó una escuela en Quita Sueños, Haina, provincia San Cristóbal, 54 escuelas en la provincia de la Vega que a su vez incluían 6 escuelas importantes de Constanza y 6 escuelas en Jarabacoa y 77 en la provincia Monseñor Nouel.



IMPACTO / RESULTADO PRINCIPAL

Con la implementación de este programa a lo largo de 26 años se ha logrado mejorar la educación de las zonas donde el programa tiene incidencia, disminuyendo a su vez el nivel de analfabetismo de la región.

Específicamente, la provincia de Monseñor Nouel tiene el índice más alto de docentes con licenciatura de 70,7% cuando el promedio nacional es de 49,9% y de postgrado con un 5,7% de un 4,0% a nivel nacional. La calidad educativa es de 95,1% y el promedio nacional es de 94,7% por lo que el impacto de elevar la calidad de la educación es significativo²⁵⁶. El programa ha impactado directamente a 132 escuelas públicas y centros educativos, y 77.000 estudiantes que representan más del 70% de la población estudiantil de las provincias Monseñor Nouel y La Vega. 4.900 personas aprendieron a leer y escribir por medio del programa de alfabetización. 794 estudiantes de escasos recursos han cursado sus estudios técnicos y universitarios a través del programa de créditos educativos y becas con una inversión de 1'123.163 dólares²⁵⁷. Asimismo, 2.100 maestros han sido formados y actualizados con herramientas pedagógicas modernas, y 80 directores de centros se graduaron del programa de liderazgo y gestión de Barna Business School, con la cual la fundación realizó acuerdos estratégicos.



INNOVACIÓN

La implementación de un sistema de capacitación para elevar la capacidad de la educación y capacidad pedagógica de los docentes redundó en beneficios directos al estudiantado, utilizando los mismos recursos humanos empleados por el Estado dominicano a través de su Ministerio de Educación. Otras empresas no lograban esta alianza de trabajar con el Estado, sino que generalmente lo que hacen es donar equipos, uniformes, libros y mobiliario pero no comprometerse en la capacitación docente. La buena práctica fue un ejemplo al que siguieron otras empresas más adelante.



PARTICIPACIÓN, PERTINENCIA, SOSTENIBILIDAD

- Participación incluyente: el programa es inclusivo, dirigido a escuelas y específicamente a escuelas rurales.
- Pertinencia según necesidad: el programa ha respondido a deficiencias del sistema educativo.
- Sostenibilidad: este programa ha producido efectos duraderos, al mejorar el nivel de educación y de la calidad docente elevando sus capacidades educativas.



ENFOQUES

Enfoque regulatorio de derechos y obligaciones: el proyecto ayudó a garantizar el derecho a la educación. Se logró elevar la calidad educativa, eliminar al absentismo escolar, la sobre-edad en las aulas y la deserción escolar y conseguir la prolongación de los niveles educativos.



LECCIONES APRENDIDAS

Puede tenerse sostenibilidad en el tiempo aún con el cambio de actores, a través de acuerdos con instituciones como el Ministerio de Educación y sus unidades provinciales y municipales, y con OSC como la Asociación Dominicana de Profesores, juntas de vecinos y líderes comunitarios y la empresa.

Las comunidades educativas, a su vez, pueden sostener sus estándares de calidad cuando participan y aprenden a cumplir con sus deberes y conocer sus derechos según establece nuestra legislación y desarrollan el sentido del bien común.



VALIDACIÓN

Entrevistas con dirección de Fundación Falcondo, profesores, líderes comunitarios, departamento de responsabilidad social de Falcondo. Visita de campo.



BIBLIOGRAFÍA / LINKS

<https://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2010/07/24/151874/falcondo>
https://www.one.gob.do/Content/pdf_perfiles/Perfil_monsenor_nouel.pdf
<http://www.funplode.org/notice/las-fundaciones-falcondo-y-brugal-potencian-la-educacion-dominicana/>
<https://www.diariolibre.com/noticias/la-fundacin-falcondo-invierte-rd624-7-millones-en-25-aos-HFDL941611>
<https://www.eldinero.com.do/5848/barna-y-falcondo-gradua-directores-de-escuelas-en-gestion-educativa/>

2.7.4. Análisis de Actores

Empresa

La República Dominicana es un país con tradición minera reciente. En los años sesenta se desarrolló la mina de bauxita en la provincia de Pedernales operada por Alcoa que luego fue abandonada por desacuerdos con el Estado. En los setenta empezaron a operar dos minas. La mina de oro y plata de Pueblo Viejo operada por la compañía de origen norteamericano Rosario Resources que luego fue adquirida por el Estado en 1989, cerrada en 1999, licitada en 2001, adquirida por Barrick en 2006²⁵⁸ y reabierta en 2012²⁵⁹.

La segunda, es la mina de níquel que fue operada en sus inicios por Falconbridge Dominicana (Falcondo) y que en la década iniciada en 2000 cambió de dueño varias veces y cerró en dos ocasiones debido a los precios en los mercados internacionales. En 2015, Falcondo fue comprado por Americano Nickel Ltd.

A manera de entender mejor la percepción que se tiene sobre la minería en el país, cabe citar que el cierre de la mina de Pueblo Viejo en 1999 que estuvo operando con producción mínima en sus últimos años y sin unos adecuados controles ambientales, al final de sus operaciones creó pasivos ambientales importantes, básicamente por concepto de Drenaje Ácido de Rocas (DAR) en terrenos y ríos cercanos a la mina²⁶⁰. El deficiente manejo ambiental de Rosario Dominicana, en la mina de Pueblo Viejo, dejó una imagen negativa sobre el sector²⁶¹.

Existen otras operaciones de minería metálica importante. Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) que extrae cobre, oro, plata y zinc y la operación de Las Lagunas Ltd. Fuera de la minería metálica existen minas importantes de sal y yeso, así como mármol y rocas coralinas, además de minas que suplen la industria cementera nacional con 7 plantas en diferentes partes del país.

Existe una asociación importante que representa a las empresas mineras y de servicios. La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) opera desde 1997 y poco a poco ha ido desarrollando un sitio en la opinión pública y es reconocida tanto por el gobierno, como por las ONG, sociedad civil, academia y diferentes gremios.

En el país no existe información básica a nivel escolar, ni universitario de la minería como renglón importante para el desarrollo del país, ni se promueve el conocimiento de los recursos minerales de la nación. Para suplir esta falta de información, CAMIPE ha diseñado un programa de charlas para las escuelas a nivel secundario, así como talleres informativos para llevar a gremios empresariales, incluyendo oficinas y dependencias estatales y a las comunidades, con el lanzamiento en conjunto con la Embajada de Canadá de las “Guías Mineras”, que son folletos editados que explican los procesos mineros desde la exploración hasta el cierre de minas²⁶².

Gobierno

El Ministerio de Energía y Minas fue creado en 2013 bajo la Ley 100-13. Los mensajes desde el Estado con respecto al desarrollo del sector han sido débiles. La renegociación del contrato de las operaciones de Barrick para la mina de Pueblo Viejo²⁶³ y el caso de Loma Miranda, una reserva importante de níquel que es parte de la concesión de Falcondo, han denotado cierta debilidad en la aplicación de reglas claras y garantías de seguridad jurídica²⁶⁴, aspectos ampliamente debatidos en la prensa nacional por los diversos sectores de la nación.



La Dirección General de Minería era una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio con casi nada de presupuesto para sus operaciones incluyendo fiscalización y controles bajo la Ley 146-71. Desde 2013 con la Ley 100-13 queda adscrito al MEM.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue creado en 2000 bajo la Ley 64-00. La Ley 64-00 es la que administra los recursos naturales del país y aplica las regulaciones ambientales junto a un conjunto de reglamentos y normas que la complementan.

Sociedad Civil

La sociedad civil está representada por diferentes instancias desde la academia, ONG y gremios comunitarios. La opinión del “No a la mina” crece cada vez más y la falta de información por parte de la industria genera vacíos que son llenados con informaciones que no son reales. La percepción de la población en general entiende que la industria no aporta lo suficiente y que hace más daño que bien.

A principios de 2017, se formó el movimiento Marcha Verde²⁶⁵, cuyo objetivo es combatir la corrupción e impunidad en la República Dominicana²⁶⁶. La sociedad civil viene organizándose cada vez más debido a casos de corrupción y falta de transparencia. Este tema detonó a principios de 2017 por un caso local y por el caso internacional de la empresa Odebrecht, lo que le dio fuerza y vigencia al movimiento en su lucha anticorrupción y que además ha tomado el tema minero como uno de sus temas de protesta. Los movimientos más críticos a la minería han venido desde la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ²⁶⁷, seguidos por un movimiento popular liderado por el Padre Rogelio Cruz, quien protagonizó una serie de protestas en contra de Loma Miranda y más recientemente en contra de una posible explotación de oro en la mina Romero de San Juan de la Maguana²⁶⁸ de la empresa minera GoldQuest. Estos tres grupos unidos al nuevo movimiento Marcha Verde han llevado el liderazgo de las protestas en contra de proyectos mineros²⁶⁹.

Existen diferentes iniciativas de diálogo a nivel nacional. El Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE) es uno de los ejemplos que ha creado un ambiente de mayor apertura y diálogo entre la industria y la sociedad civil y el gobierno. Sus miembros representan mayormente a las provincias de Pedernales, San Juan de la Maguana, Barahona, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata. Otros esfuerzos existen entre la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE), organismo que representa al sector minero del país, con instituciones como la Academia de Ciencias, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD y la organización no gubernamental Participación Ciudadana²⁷⁰.

2.7.5. Marco Legal



Información

La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04 del 28 de julio de 2004 regula el acceso a la información. El capítulo 1 y el artículo 2 de la ley establecen la obligatoriedad y el derecho que tienen todos los ciudadanos a tener acceso libre a la información sobre las actividades estatales, y sobre empresas del Estado o con vínculo estatal y los proyectos de desarrollo de la nación.

Con la Ley 100-13 (2013) se crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual en calidad de órgano rector está aún ajustando asuntos técnicos y legales relacionados tanto al sector minero como al de hidrocarburos. Las disposiciones que emite el MEM son informadas a los sectores a través de resoluciones que son publicadas en la página web del MEM. El MEM ha abierto el departamento Técnico de Gestión Social, que se encarga de vincularse con las comunidades mineras, educarlos sobre el tema minero, escuchar sus quejas y expectativas y enlazar a las partes interesadas en la búsqueda de soluciones.

La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00 de 25 julio 2000) establece la obligatoriedad de difusión pública de los estudios de impacto ambiental (art. 48-50).



Consulta

La misma Ley establece los procedimientos de evaluación ambiental y sus alcances incluyendo la consulta pública (art. 38). El artículo 43 obliga a la solicitud de una carta de no objeción a los proyectos por parte de los gobiernos locales. En el Compendio de Reglamentos y Procedimientos para autorizaciones ambientales de la República Dominicana de 22 de Septiembre 2014 se estipula que el proceso de participación pública de todos los proyectos consiste en por lo menos cuatro instancias posibles y no excluyentes de participación: información o divulgación del proyecto; análisis de interesados; visitas públicas; comentarios a los estudios ambientales; audiencia pública.

En los proyectos susceptibles a estudios de impacto ambiental, el proponente deberá realizar una visita pública indicando el posible impacto en la zona de influencia que puede afectar el proyecto. La visita deberá ser de invitación abierta y publicada en un periódico de circulación nacional o a través de medios de comunicación asequibles a las comunidades del entorno del proyecto. La información publicada debe contener datos básicos sobre el proyecto, ubicación y objetivos. Dependiendo de la magnitud del proyecto y si el mismo contempla minería metálica o no metálica, se solicitarán más de una visita pública. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA)



se reserva el derecho a aplicar cualquier instrumento de participación pública y puede convocar audiencias públicas en cualquier instante del proceso de autorización ambiental.

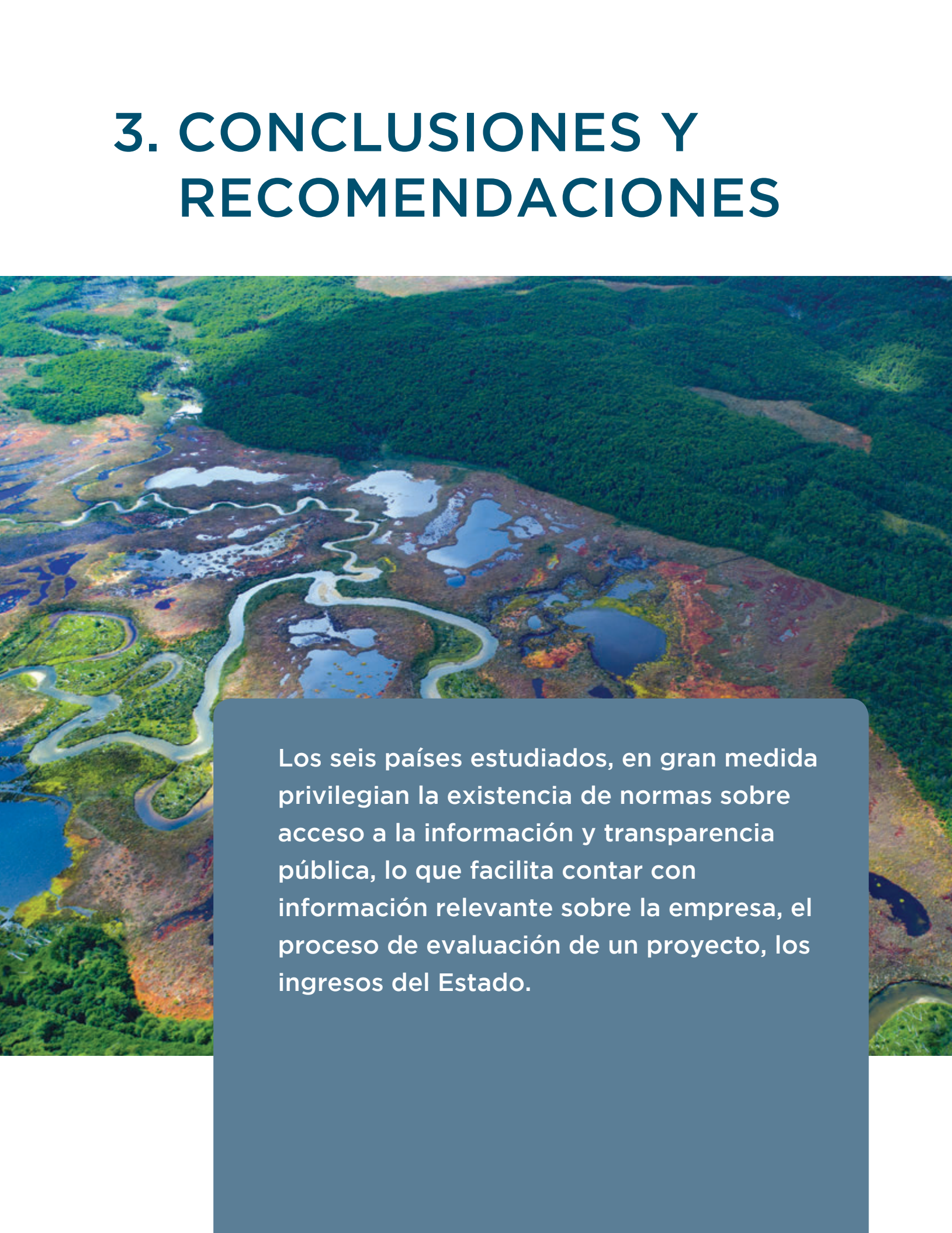
Los proyectos requieren audiencias públicas que serán coordinadas a través de MIMARENA. La comunidad tendrá una participación activa y debe incluir desde las juntas de vecinos, clubes, hasta asociaciones gremiales, empresariales, universidades o centros educativos y autoridades municipales, entre otros. Los comentarios y observaciones recogidos formarán parte del informe técnico y el informe final que se presenta dentro de la solicitud de la licencia ambiental. Este proceso es evaluado por MIMARENA y en caso de ser necesario repetirlo se procederá a una nueva convocatoria.

En la Ley General de Minería, 146-71 del 4 de junio de 1971, no se contemplan visitas públicas o consultas públicas, ni conceptos ambientales. Esta ley solamente se refiere a la necesidad de ponerse en contacto con los propietarios de terrenos para acordar derechos de paso o servidumbre o compra de terrenos.

Plebiscito

La Ley No. 176-07 sobre municipios del 17 de julio de 2007 establece la facultad de los municipios de administrar sus territorios y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos. El artículo 234 establece el derecho a plebiscito para consulta a la ciudadanía sobre lineamientos generales de medio ambiente, proyectos de infraestructura o de ordenamiento territorial. Cabe destacar que como parte de la documentación que se presenta en el estudio de impacto ambiental para la solicitud de la licencia ambiental debe incluirse la carta de no objeción que debe emitir el ayuntamiento del área del proyecto indicando que no existe impedimento en cuanto a uso de suelo y tipo de industria en la zona de influencia del proyecto.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita contar con información relevante sobre la empresa, el proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del Estado.

3.1. Conclusiones

Sobre la economía, las industrias extractivas y el relacionamiento con otros actores

- El sector extractivo sigue manteniendo un sitio de importancia en cuanto a su aporte a la economía de América Latina, a pesar de la conclusión del denominado súper ciclo de los commodities mineros e hidrocarburíferos. Los marcos normativos nacionales se adecuaron para promover el arribo de grandes inversiones en este sector, como se puede apreciar en la apertura del sector hidrocarburífero en México, anteriormente bajo el monopolio estatal, con la reforma energética del 2014. Estas políticas han contribuido a que ingresen corporaciones internacionales las cuales han aumentado el nivel de los estándares de relacionamiento comunitario, y como consecuencia del incremento de la recaudación fiscal han contribuido, en conjunción con la sociedad civil, a impulsar mecanismos multi-actor que favorecen la transparencia, como es el caso de la EITI que viene operando auspiciosamente en algunos países de la región.

Sobre los marcos normativos y los niveles de relacionamiento:

- En relación a los marcos normativos nacionales, aparte de la normativa referida a la industria extractiva, medioambiental, fiscal y de desarrollo, los seis países estudiados, en gran medida privilegian la existencia de normas sobre acceso a la información y transparencia pública, lo que facilita a la ciudadanía contar con información relevante sobre la empresa, proceso de evaluación de un proyecto, los ingresos del estado en algunos casos. La información que proveen las industrias extractivas al Estado en el marco de sus obligaciones está sujeta a este marco regulatorio.
- Igualmente, las normas que contemplan la participación ciudadana como derecho a participar en las distintas fases de la actividad extractiva están muy extendidas en los seis países estudiados y se manifiesta, como una de sus dimensiones, a través de la figura de la consulta pública.
- La información identificada en cada país da cuenta de que no existe normatividad específica referida a otros niveles de relacionamiento como colaboración o alianzas a excepción de Perú que cuenta desde el año 2010 con una norma que establece un compromiso previo de la empresa con las comunidades del área de influencia, como requisito para el desarrollo de las actividades extractivas.
- El diálogo es un mecanismo que se encuentra, en sentido amplio, en todos los niveles de relacionamiento comunitario y está incorporado en segmentos de la normativa vigente al momento de regular los procedimientos participativos y de consulta.
- La mayoría de los países de este estudio han firmado el Convenio 169 de la OIT, salvo República Dominicana, pero solo Colombia, Perú y Chile cuentan con una reglamentación para implementarlo. De hecho, en los otros países el proceso depende de la interpretación hecha por las empresas y las autoridades locales, con posibilidades de cuestionamiento y judicialización del proceso, causando inestabilidad e inseguridad para las partes.

Sobre las prácticas, los niveles de relacionamiento y el Diálogo articulador

- Cuando las prácticas están conformadas por varios niveles de relacionamiento, frecuentemente es el nivel de diálogo el que suele articularlas. Los diálogos podrían evolucionar hacia la definición de agendas de trabajo específicas.
- Debido al grado de complejidad que exige su implementación, por lo general, el relacionamiento a través de los niveles de colaboración y de alianza, suele producirse a través del diálogo multi-actor, en su versión más estructurada, al que fundamentalmente se recurre como mecanismo más propicio para aclarar los intereses y necesidades de las partes, así como para generar la confianza necesaria que exigen estos procesos complejos y negociar acuerdos de beneficio mutuo.
- El relacionamiento multi-actor adecuadamente organizado y gestionado y con mirada estratégica e integral, contribuye a implementar proyectos vinculados a planes de desarrollo local, a elevar las voces de los actores involucrados, a influir en las decisiones sobre la operación, así como sobre los planes de relacionamiento, a mejorar la relación y a contribuir al logro o la vigencia de la licencia social.

Sobre los principales actores

Sociedad Civil

- Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las comunidades, las ONG y los movimientos sociales, asumen diferentes roles frente a la industria extractiva: como proveedores o contratistas que ejecutan proyectos sobre desarrollo; tendiendo puentes e impulsando procesos colaborativos; siendo críticos de la forma como viene operando la industria; promoviendo el debate y haciendo incidencia en políticas públicas y en garantizar derechos individuales y colectivos de las comunidades u oponiéndose abiertamente a la actividad extractiva a través de acciones de resistencia.
- Las universidades que gozan de legitimidad son importantes recursos locales puesto que tienen la confianza de una cantidad relevante de actores como el poder de tejer redes con actores claves de diferente naturaleza, tanto en materia de generación de conocimiento como en el fortalecimiento de capacidades. Son vistos como un actor especializado e imparcial para asuntos técnicos y para realizar investigaciones sobre la industria extractiva.
- Las OSC se desempeñan también desde un rol de terceros en los procesos de relacionamiento entre comunidades y empresas, sea facilitando el diálogo o la negociación entre las partes, asesorando los procesos, capacitando a la empresa y/o comunidad para una participación adecuada y constructiva en los procesos, siendo observadores, o acompañando en la implementación de los proyectos de desarrollo.

Estado

- La relación entre el Gobierno Nacional/Federal con los Gobiernos Regionales/Estatales/Provinciales y Locales suele generar tensiones derivadas de las políticas y medidas referidas a la gobernanza de los recursos naturales. En situaciones extremas, las tensiones, eventualmente, han llegado a una franca oposición y rechazo hacia la industria extractiva. Resulta, por tanto, importante que los diferentes niveles de gobierno establezcan mecanismos de coordinación y diálogo intergubernamental para la discusión concertada e implementación de políticas públicas referidas al desarrollo económico sustentable, y determinen cuál es el papel que juegan las industrias extractivas en el desarrollo del país y los territorios locales.

Empresas

- Los equipos dedicados a la gestión social y el relacionamiento comunitario son imprescindibles para la operación de campo, articulados con las otras áreas de las empresas. Esta articulación interna es importante y necesaria. En algunos casos, las empresas optan por la contratación o suscripción de acuerdos con consultoras, organizaciones/entidades comerciales o de la sociedad civil especializadas en gestión social y relacionamiento comunitario. En algunos casos considerar a un equipo externo para apoyar el relacionamiento comunitario facilita los encuentros de diálogo, además de contar con una mirada externa del proceso.
- Los gremios de las industrias extractivas tienen como finalidad fundamental representar los intereses y necesidades de las empresas afiliadas. Tienen el potencial de ser importantes contribuyentes a través de proyectos dirigidos a las empresas en su relacionamiento con las comunidades, incluyendo perspectivas innovadoras, como la buena práctica de las Cuencas Sociales de Argentina, que desde la Cámara de Minería de Salta articula a las diferentes empresas mineras que operan en un territorio en su relacionamiento con las comunidades del entorno.

Sobre los temas abordados en las prácticas

- Las buenas prácticas incorporan una gama temática sumamente amplia, vinculadas a las necesidades humanas y derechos de los entornos sociales y a las necesidades operativas de los proyectos extractivos. Desde un nivel básico de información sobre el proyecto, todos los niveles de relacionamiento dan pie a la incorporación de asuntos de múltiples tipos, como:
 - » Temas ambientales, como aquellos vinculados al agua, aire, ruido, uso de la tierra;
 - » Búsqueda de soluciones concertadas con la comunidad vinculadas a las necesidades de la operación (infraestructura en salud, vialidad, electricidad, agua potable, entre otros);
 - » Manufactura de productos;
 - » Educación y servicios básicos;
 - » Asuntos que atañen a grupos específicos como mujeres, adultos mayores, comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad;
 - » Cuestiones sobre desarrollo local;
 - » Establecimiento de relaciones duraderas en el marco del desarrollo sostenible y la licencia social;
 - » Fortalecimiento de la institucionalidad comunitaria y local.

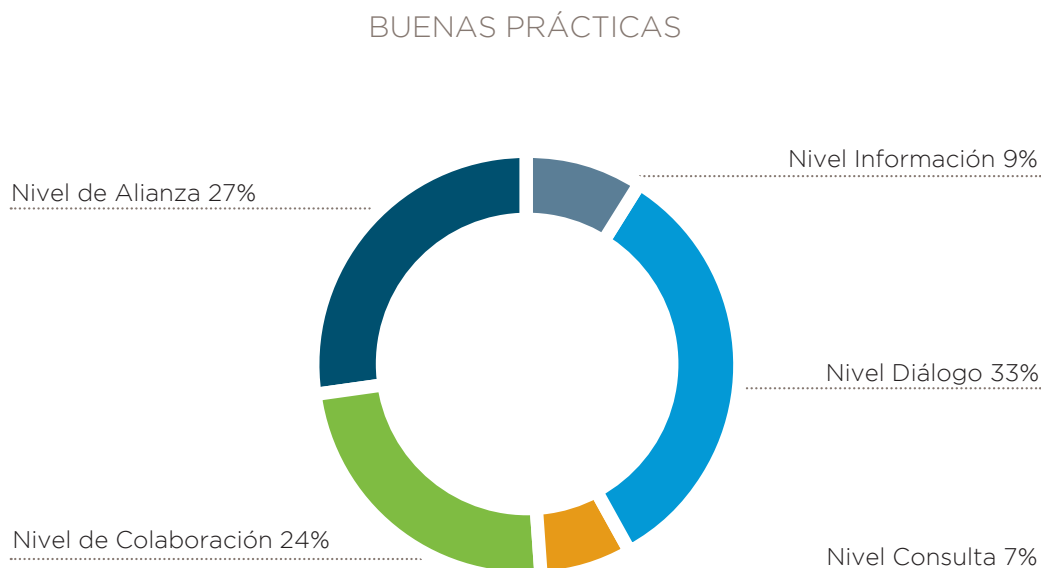
Sobre el relacionamiento

- *Aporte del sector extractivo en la economía nacional y regional:* Existe un reconocimiento de parte de todos los actores que el sector hace aportes relevantes a la economía nacional. Sin embargo, a nivel local las comunidades aun sienten que existe una deuda pendiente de parte de la industria al desarrollo y mejora local.
- *Estándares mínimos de relacionamiento:* La industria extractiva, en relación con otras actividades económicas, considera el tema del relacionamiento con las comunidades del área de influencia como parte relevante, inclusive en ocasiones como parte clave para el negocio y no como un tema netamente voluntario. Existe consciencia de los potenciales costos que puede significar para el desarrollo de un proyecto extractivo un entorno de riesgo social.
- *Lo exigido y lo voluntario:* Los procesos de relacionamiento reflejan que el comportamiento de la industria se derivan tanto de las normas definidas por el Estado como por las políticas internas de las empresas (códigos de conducta) y los estándares de la industria a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el Estado está empezando a asumir un rol más activo en definir estándares mínimos de relacionamiento, en base a las buenas prácticas reconocidas y con ello dar seguridad tanto a las empresas como a las comunidades sobre la mejor forma de establecer relaciones armoniosas y constructivas orientadas al desarrollo sostenible. Adicionalmente la industria sigue avanzando en políticas voluntarias que benefician el desarrollo del territorio en la cual está la operación.
- *Las OSC:* En los últimos 5 años han cumplido un importante rol, logrando una cierta incidencia en las decisiones de políticas públicas, a la hora de proponer, acompañar y velar por el cumplimiento de la normativa de los proyectos de la industria extractiva. Han logrado en los diferentes niveles (local, regional/provincial y nacional) de incidencia, que se reconozcan sus aportes para alcanzar objetivos comunes con la industria. Sin dudas esta incidencia se vio favorecida por el uso masivo de las redes sociales y el desarrollo de la transformación digital.
- *El relacionamiento con la sociedad civil en continuum:* La construcción de confianza es una tarea prioritaria. Adicionalmente quienes faciliten y participen en estos espacios de construcción de buenas prácticas de relacionamiento deben ser actores con conocimiento y trayectoria en esta materia, que faciliten los procesos de interacción; actores imparciales que construyan un relacionamiento permanente y útil reconociendo las diferencias de cada una de las partes.
- *Percepciones respecto a las industrias extractivas:* Aún existe rechazo hacia el sector extractivo por parte de algunos sectores. Generalmente, estos se basan en la percepción de que el crecimiento de la actividad extractiva no se ha traducido en mejores condiciones de vida para algunas comunidades que conviven con los proyectos extractivos, y que en algunos casos han visto desplazadas las actividades económicas previamente existentes (agricultura, turismo local, ganadería, entre otras), generando dependencia a una actividad finita, además de la preocupación por los impactos ambientales y a la salud que pudiera traer consigo esta actividad.

- *De conflicto al acuerdo negociado:* La revisión de algunas prácticas estudiadas da cuenta de que la relación entre la industria extractiva y las comunidades ha pasado de un proceso de conflicto y oposición a un proceso de negociación transaccional que compensa a las comunidades con beneficios sociales, empleo y obras de infraestructura. Esta dinámica eventualmente aporta a los procesos de desarrollo local.
- *Tejido interno de las comunidades:* Muchas veces, la complejidad de las relaciones al interno de las comunidades han generado tensiones que se traducen en reclamos de difícil comprensión y donde las empresas sin contar con metodologías para abordar la conflictividad de manera más amplia e integral.
- *Rol del Estado:* La característica histórica del Estado ha sido conservar una posición distante y mirar desde afuera los procesos de relacionamiento que se dan en los diferentes niveles entre las empresas y las comunidades. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un actor clave en el nivel de consulta.

Sobre las prácticas de relacionamiento

- Este estudio ha encontrado en los diagnósticos de los seis países 27 buenas prácticas en todos los niveles de relacionamiento, 5 a nivel de Información, 18 a nivel de Diálogo, 4 a nivel de Consulta, 13 a nivel de Colaboración, y 15 a nivel de Alianza. Cabe agregar que en la mayoría de las buenas prácticas se han identificado dos o más niveles simultáneamente.



- Grandes avances: Las buenas prácticas del estudio muestran que ha habido varios avances en miras a mejorar la relación entre la industria y las comunidades, tales como la incorporación de políticas corporativas de relacionamiento, equipos de profesionales especializados y recursos económicos. Sin embargo, todavía hay debilidades en el relacionamiento entre la sociedad civil y las industrias extractivas. Las experiencias documentadas han contribuido al aprendizaje y a la generación de nuevas e innovadoras prácticas de relacionamiento que pueden ser aprendidas, mejoradas y replicadas en otros proyectos.
- Se considera que el sector extractivo tiene una gran experiencia de buenas prácticas, reconocidas y validadas con resultados positivos para la calidad de vida y el relacionamiento de actores, labor que debería ser orientada tanto a las comunidades, academia como a las propias empresas.
- Un conflicto observado en la mayoría de las buenas prácticas estudiadas es la oposición al proyecto por parte de la comunidad, por la forma en la que el proyecto convive con su entorno (ambiental, social, cultural) y/o por la falta de beneficios directos y al desarrollo de la comunidad. El diálogo se destaca como el canal necesario para resolverlo, siendo una alternativa para establecer acuerdos y negociar con la comunidad. Los espacios de diálogo se hacen necesarios para resolver las problemáticas de pequeños sectores rurales del entorno de una gran explotación extractiva. Por ejemplo, alianza para mejorar la producción ganadera .
- Instancias de participación ciudadana temprana: Las decisiones que se toman sobre los proyectos de gran escala nacional, muchas veces no cuentan con la participación efectiva y el consenso de los gobiernos locales y comunidades de los territorios. Sin este paso que le da legitimidad social al proyecto, los procesos de participación ciudadana (incluyendo la consulta previa) se tornan complejos, lentos y/o conflictivos.
- Las alianzas entre OSC han comenzado a jugar un papel de acercamiento comunitario, como es el caso del Clúster de Energía Coahuila cuyo papel, entre otros, es informar sobre las implicaciones de la reforma energética y el nuevo papel de las empresas en la región. La intermediación de la sociedad civil puede ayudar en que la información sea más confiable y por ello mejor aceptada por las comunidades.

3.2. Recomendaciones

Para las empresas

- Contar con una planificación temprana, oportuna y a largo plazo de relacionamiento con las comunidades que contribuya al progreso económico y atención de temas de orden social y ambiental en los territorios donde desarrollan sus proyectos.
- Contar con un área dedicada exclusivamente a la gestión social y las relaciones comunitarias. Este estudio, ha podido constatar que contar con un área y equipo de trabajo idóneo ha ayudado a las empresas a desarrollar mejores prácticas.
- Considerar las particularidades del territorio y asimilar como una buena práctica el reconocimiento de los derechos de las diferentes comunidades. Se recomienda incluir dentro de sus protocolos de debida diligencia un levantamiento de información detallada sobre la dinámica del territorio y las comunidades presentes en el área de influencia, ya sea de la mano de la comunidad o posteriormente validada por ella.
- Coordinación regular con los líderes comunitarios desde el principio involucrándolos en los diferentes niveles de relacionamiento, información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas.



- Generar acciones por nivel de información, diálogos, consultas, colaboración y alianzas que sean revisadas sistemáticamente, que incluyan plazos para su revisión y que sean flexibles para ser replanteadas, que tengan objetivos, metas y tiempos bien definidos desde el principio, que se apeguen a la legislación y que busquen un relacionamiento con acompañamiento constante y sistemático.
- Seguimiento a las acciones derivadas de la legislación referida a las industrias extractivas, en lo ambiental y en lo social, con el cumplimiento y continuidad a los acuerdos de las mesas de diálogo con coordinación intersectorial e intergubernamental.
- Fortalecer a los gremios y organizaciones representativas de las empresas que pueden participar en los más diversos espacios de diálogo y concertación para una mayor fluidez en el relacionamiento.
- Propiciar capacitaciones para fomentar alianzas con proyectos en los territorios, incentivando la participación comunitaria.
- Considerar a las Agencias Multilaterales de Desarrollo (MDB por sus siglas en inglés) líderes en América Latina y el Caribe que cuentan experiencia en el relacionamiento ciudadano²⁷¹ para un enfoque interdisciplinario en la región y con experiencia comparada en temas de sociedad civil como aliados técnicos en la elaboración de planes de relacionamiento, así como a OSC del país con experiencia territorial, para fortalecer los principios de relacionamiento entre empresas y comunidades gracias a sus conocimientos técnicos y cercanía con la comunidad.
- En la medida que las actividades extractivas van a producir afectaciones ambientales, se recomienda que las empresas prioricen el cumplimiento ambiental en el marco de las legislaciones nacionales, así como el relacionamiento social con información oportuna, veraz y transparente, promoviendo el relacionamiento con las comunidades para el análisis de los problemas y la toma de decisiones.

Para la Sociedad Civil

- Formar una estructura orgánica que permita dar a conocer los líderes comunitarios representativos como legitimados para dar información en tiempo oportuno, interactuando con el gobierno, las empresas y otras comunidades si fuera el caso, para la elaboración de iniciativas conjuntas en el marco de un relacionamiento sistemático y no solo circunstancial.
- Por la disparidad de culturas, ritmos y tradiciones, es necesario que el Estado y las empresas adapten espacios de relacionamiento a esta realidad. Asimismo, las propias comunidades para alcanzar resultados efectivos han de identificar los recursos para acercar sus enfoques de un modo oportuno.

- Asegurar la integración de los miembros de las comunidades por parte de los líderes comunitarios, en las decisiones sometidas a consulta como así en aquellas instancias de influencia a través de mesas temáticas que contemplen la disparidad de género, y con el fin de facilitar la formación de capacidades, así como la apropiación de conocimientos por parte de la comunidad. El trabajo de los líderes comunitarios para la participación significativa de la comunidad evidenciada en las prácticas analizadas ha sido clave para transformar la percepción que tienen las comunidades sobre la industria extractiva, mejorar las relaciones existentes y prevenir el surgimiento de conflictos.
- Los líderes comunitarios deben estimular y promover la disseminación de información oportuna así como diálogos con miembros de la comunidad y de las personas de las empresas cuyas labores están relacionadas, para la elaboración de planes y estrategias de relacionamiento en las distintas fases de la actividad extractiva.
- Los líderes comunitarios y las empresas pueden apoyar procesos de acompañamiento, formación y capacitación, orientados a fortalecer capacidades de diferentes grupos comunitarios (mujeres, jóvenes, minorías) en procesos que incorporen una mirada integral de territorio, para que se pueda tener un desarrollo sostenible e independiente de la presencia de la empresa.
- Contactar a actores imparciales, (como universidades), para la resolución de problemas y toma de decisiones en relación a conflictos internos de la comunidad o con los otros actores (gobiernos, empresas).

Para el Estado

- Implementar acciones de monitoreo periódico para recibir retroalimentación sobre la percepción que tienen tanto la sociedad civil como la empresa. La experiencia muestra que el monitoreo es importante para involucrar a otros actores y sectores, comunicar sobre la práctica, dar más transparencia y hacer ajustes necesarios de acuerdo con especificidades locales.
- Contar con metodologías para las consultas públicas incluyendo a las autoridades locales, minorías (grupos de mujeres, ancianos, jóvenes). Se sugiere construir procesos sistemáticos y periódicos de los niveles de información y diálogo, habilitando la colaboración con mecanismos de quejas, accesibles desde la misma comunidad y de forma anónima.
- Promover la participación ciudadana temprana indispensable para generar espacios de relacionamiento que promuevan oportunidades de crecimiento y mitiguen impactos adversos potenciales de las operaciones de extracción, prevenir conflictos, construir confianza y legitimidad social, así como optimizar el valor potencial en las regiones.
- Reglamentar la aplicación de la Convención OIT 169 con estándares mínimos para las consultas públicas. Respaldar la labor de los organismos de supervisión, fiscalización y de revisión de los estudios ambientales, sosteniendo y afinando los mecanismos de participación y Consulta Previa (Convenio 169 OIT), el fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo y otras instituciones de defensa de los derechos ciudadanos.
- Fortalecer los instrumentos ambientales que permitan a la autoridad ambiental vigilar el cumplimiento de los planes de mitigación y los compromisos en materia del cierre de proyectos extractivos. La planeación anticipada del cierre económico y ambiental

es un aspecto de gran relevancia para contener pasivos ambientales y sociales y a la postre mejorar la percepción que tienen las comunidades en la zona de influencia de los proyectos y de la población en general.

- Fortalecer mecanismos de transparencia para la administración de los fondos generados por las rentas de la actividad extractiva apoyando nuevos proyectos, que a su vez generen nuevos emprendimientos en las regiones ricas en recursos naturales de modo de asegurar la creación de empleos de fuentes alternas, que fortalezcan las economías locales innovando y generando ingresos a largo plazo.
- Capacitar a los gobiernos locales sobre los temas que afectan los intereses de sus territorios, apoyando la generación de capacidades políticas y técnicas que apoyen y articulen los procesos de ordenamiento territorial.

Para los tres actores

- Utilizar las nuevas tecnologías a favor de formas más eficaces de relacionamiento. La madurez de los sistemas democráticos de la región, el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías, está dando una oportunidad sin precedentes para que responsables de los gobiernos, oficiales de empresas y líderes comunitarios cuenten con nuevos instrumentos de acercamiento e información para la discusión de intereses territoriales comunes.
- Tanto desde los gobiernos, como desde las empresas y de las comunidades, resulta relevante fomentar y acercarse a través de espacios de relacionamiento con acciones de información oportuna y confiable; promoción de diálogos que incluyan minorías, consultas públicas siguiendo regulaciones sectoriales que hayan contado con instancias de información y dialogo previos, promoción de colaboraciones en formación de capacidades que permitan un desarrollo territorial sostenible, promoción de alianzas en acciones de monitoreo participativo y/o de desarrollo de pequeñas empresas.
- Construir planes de relacionamiento iniciado por cualquiera de los actores principales, con actividades claras genera confianza, por lo que un rol más activo del gobierno y de grandes empresas en el fomento de espacios de concertación, donde las comunidades participen contando con la previa información y capacitación para exponer intereses y preocupaciones representa, como lo demuestran los hallazgos, un avance para el crecimiento sostenible.
- Incluir a otros recursos existentes, OSC locales, y sobre todo universidades con legitimidad para fortalecer un relacionamiento sostenible.
- Informar y revisar las proyecciones sobre los recursos de las industrias extractivas y los límites para la dinamización de la economía, reconociendo que esta es una actividad que depende de una serie de variables ajenas a planificaciones específicas. En particular, los espacios subnacionales han de proyectar sus actividades considerando recursos de otras fuentes y del sector extractivo, de forma de no generar frustraciones por eventuales variaciones en las transferencias desde el gobierno nacional. En este aspecto se requiere reforzar la información y análisis de las proyecciones de las industrias extractivas con autoridades y líderes de la sociedad civil, teniendo como base las acciones de transparencia de las industrias extractivas en marcha.

4. HOJA DE RUTA

A continuación, se propone una hoja de ruta elaborada a partir de los hallazgos del diagnóstico. La misma tiene como objetivo ofrecer lineamientos claros a representantes de empresas, de agencias gubernamentales y de la sociedad civil, para fortalecer la articulación de estos tres actores, promoviendo espacios de interacción que se enfoquen en el territorio y respondan a las necesidades de las comunidades. Esto con la meta última de contribuir con los esfuerzos para promover una actividad extractiva responsable como sinónimo de desarrollo.





Hoja de Ruta de República Dominicana

Actores: En el diseño de esta hoja de ruta se evidenció como especialmente importante potenciar los esfuerzos de quienes conforman la *Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI)*. Desde julio de 2015, la República Dominicana se ha unido a la iniciativa con su propia Comisión Nacional. La implementación de la EITI en la República Dominicana ha permitido articular el trabajo del gobierno, la sociedad civil y la industria, en torno al sector extractivo, con una mayor comprensión de las inquietudes de la sociedad civil y de la forma en que el gobierno administra los recursos provenientes de esta actividad.

GOBIERNO:



Nivel Información

La República Dominicana cuenta con diferentes mecanismos que promueven Información en el sector y que constituyen una oportunidad para mejorar el acceso a la Información para la sociedad civil. Adicionalmente, en el marco de la iniciativa EITI se publica Información sobre contratos y rentas mineras en línea.

A la vez, se observa la necesidad de promover un mecanismo que permita el intercambio de Información entre los diferentes actores de forma conjunta a nivel local. Este diagnóstico ha identificado experiencias en las que a través de mesas de Diálogo se promueven intercambios, como el caso de Cuencas Sociales de Argentina, la Mesa de buenos vecinos de Sierra Gorda en Chile, la participación de familias campesinas en programa de compensación forestal de Colombia y el Grupo Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, de Perú. Todas las experiencias tienen en común que la Información se genera y pone al acceso del público en el marco de un proceso de Diálogo multi-actor, evidenciando así como los diferentes niveles de relacionamiento se complementan generando círculos virtuosos de relacionamiento.



Nivel Diálogo

La Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) adoptada por el gobierno de la República Dominicana en 2015, ha sentado un precedente importante y el principal ejemplo de Diálogo multi-actor en el país. Otro ejemplo del rol positivo que puede jugar el Estado en procesos de Diálogo es el del Gobierno provincial de Sánchez Ramírez, que logró articular otras instancias gubernamentales simultáneamente, lo cual no había sido la práctica en ocasiones anteriores. Para fortalecer dichos esfuerzos, las experiencias Cuencas Sociales en Argentina, Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda en Chile, Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal de Colombia y Grupo Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, de Perú ilustran el poder del Diálogo para articular e integrar una diversidad de actores, muchos de ellos con intereses contrastantes.



Nivel Consulta

La Ley No. 176-07 sobre municipios prevé la participación de comunitarios en la toma de decisiones y establece el derecho a plebiscito. Este marco legal es reciente y solo se lo ha aplicado en el caso de Planes de Desarrollo Municipales en la República Dominicana. El plebiscito para confirmar los resultados de Consulta con la sociedad civil es un ejemplo a seguir. Alternativamente, a nivel comunitario, el gobierno se beneficiaría al promover la validación de acuerdo logrados mediante Consulta a toda la comunidad potencialmente afectada por los proyectos, como en el caso de la Consulta con la Comunidad de Caimanes en Chile.



Nivel Colaboración

El gobierno cuenta con las herramientas para establecer acuerdos de Colaboración multi-actor basados en la gestión del conocimiento sobre el sector, sus aportes, estadísticas, logros, recaudaciones, inversión y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. En Perú se dio una experiencia donde una pluralidad de actores reconoció como lección aprendida el hecho de que los actores conozcan el funcionamiento del Estado, sus burocracias, competencias, plazos, requisitos, etc. Esto ayuda a la construcción de confianza y a poder gestionar las acciones que garanticen un clima armónico dentro de los objetivos de desarrollo del sector. Otro ejemplo que vale la pena recalcar es el caso de Colombia: Participación de familias campesinas en programa de compensación forestal, en el cual la participación del gobierno junto a las empresas, las ONG y la comunidad fue un gran apoyo al éxito del proyecto.



Nivel Alianza

Este diagnóstico ha identificado varias alianzas en torno al sector extractivo en las que el gobierno de la República Dominicana forma parte, notablemente la Incubadora de Empresas Cibao Sur, que se derivó de un plebiscito. Por lo tanto, se exhorta a los gobiernos locales y nacional a continuar involucrándose en estos esfuerzos y se observa una gran oportunidad para profundizar su relacionamiento con empresas extractivas y sociedad civil en este nivel. Algunas referencias interesantes para ello se encuentran en el caso del Perú con el proyecto de Mesa de Diálogo Huari, cuya Alianza resultante logró frenar problemas y confrontaciones. En este caso el compromiso del gobierno fue significativo para el cumplimiento de la solución del conflicto. La Alianza Valor Minero en Chile también integra una red multi-actor y es un ejemplo de Alianza Público-Privada que sería un buen referente para el desarrollo del sector extractivo en la República Dominicana.

SOCIEDAD CIVIL



Nivel Información

El diagnóstico de la República Dominicana demostró la necesidad de crear un foro donde se intercambien informaciones relevantes entre la sociedad civil y la industria extractiva. La sociedad civil se vería beneficiada de jugar un rol más activo en la demanda de información veraz al gobierno y a las empresas. La información abierta y fluida genera confianza y permite un monitoreo del accionar de la industria, como demuestran las experiencias de las Mesas Redondas Comunitarias de Bonao y los resultados de los Planes de Desarrollo Municipales, en los que la sociedad civil jugó un papel esencial. En México existen como referencia dos proyectos para el sector minero que documentan la importancia de demandar información de las empresas. Uno es el



Monitoreo Participativo de Calidad de Agua, de la Minera Media Luna , en el que el reclamo de la comunidad resultó no solo en la comprobación de la calidad del agua, sino además en la capacitación de líderes para el monitoreo del recurso hídrico. La segunda referencia es el Plan Integral de Cierre, de la empresa New Gold , en el que la intermediación de una organización de la sociedad civil apoyó el levantamiento de información cierta, permitiendo la implementación de acciones en concordancia con las necesidades de la población.



Nivel Diálogo

La construcción del Diálogo como herramienta de relacionamiento ha demostrado ser muy efectiva en el país. Los diferentes actores de las Mesas redondas Comunitarias que incluye a gobiernos locales y a los diferentes gremios de cada comunidad, toman decisiones consensuadas para el desarrollo local y reciben el acompañamiento de la empresa Falcondo en sus procesos. Este ejemplo de Diálogo puede ser llevado a otros niveles, siguiendo el ejemplo del Perú y el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible que ha trascendido fronteras y formado el Grupo Diálogo Latinoamericano. En el caso de la República Dominicana, la sociedad civil puede tomarlo como ejemplo para trascender la frontera provincial y llevar el Diálogo a nivel nacional.



Nivel Consulta

Un referente de Consulta en la República Dominicana fueron los Planes de Desarrollo Municipales implementados en las provincias Sánchez Ramírez y Bonao. El éxito de la Consulta se basó en la construcción de Diálogo como herramienta con participación multi-actor entre autoridades locales, comunidad y empresa, evidenciando nuevamente la complementariedad de los distintos niveles de relacionamiento. Se recomienda a la sociedad civil participar activamente en espacios regionales para conocer las experiencias de Consulta en otros países y promover procesos de aprendizaje y gestión de conocimiento a nivel nacional.



Nivel Colaboración

Un gran ejemplo de relacionamiento en la República Dominicana son los acuerdos de Colaboración que existen entre las Mesas Redondas Comunitarias y la empresa Falcondo. Este caso adicionalmente conectó a las nueve comunidades entre sí en torno al tema extractivo, creándose un enlace que antes no existía a pesar de su cercanía geográfica y potenciando las oportunidades de desarrollo para la sociedad civil. Un proyecto similar e interesante que ha recorrido todos los niveles de relacionamiento desde la Información hasta la Alianza y que tienen elementos replicables en la República Dominicana es el de la Mesa Buenos Vecinos de Sierra Gorda en Chile. En esta experiencia se ha construido un Diálogo territorial que ha vinculado a varias comunidades, integrando toda la información generada para el bien común de todo el territorio y dando pie a niveles de relacionamiento más complejos. Algo similar se podría plantear desde la sociedad civil, ya que en la República Dominicana las empresas Barrick, Falcondo y Cormidom comparten territorios muy cercanos y para las comunidades sería conveniente colaborar con ellas de manera unificada.



Nivel Alianza

Este diagnóstico ha identificado varias alianzas en torno al sector extractivo en las que la sociedad civil juega un papel clave. Por ejemplo, el Apadrinamiento de Escuelas en el cual las asociaciones de padres, la Asociación Dominicana de Profesores y juntas de vecinos tuvieron tanta relevancia. Se recomienda a las comunidades a continuar involucrándose en este tipo de esfuerzos y se observa una gran oportunidad para profundizar su relacionamiento con empresas extractivas, gobiernos y con otros miembros de la sociedad civil en este nivel a través de su participación en alianzas similares.

EMPRESA



Nivel Información

Positivamente, todos los proyectos mineros por ley 64-00 deben de proveer la Información obligatoria. Por lo tanto, las empresas ya colocan a disposición una cantidad significativa de Información, al público en general, incluyendo la comunidad y el gobierno. La Ley también contempla la realización de vistas públicas donde se explica el proyecto, sus alcances y se escuchan las preocupaciones de las comunidades que serán influenciadas por el proyecto. En los diagnósticos de Argentina, Chile y Colombia, se identificaron tres prácticas que demuestran que el trabajo en equipo tiene beneficios compartidos importantes para el desarrollo, no solo de una mina sino también de una región. Las Cuencas Sociales en la provincia de Salta, Argentina donde lo interesante es que 5 empresas, 4 de ellas aun en etapa de exploración y una en la etapa de construcción, se reúnen y deciden conjuntamente la estrategia para trabajar con las comunidades y mantenerlas informadas sobre los diferentes procesos mineros que llevan a cabo. Así, las comunidades tienen un espacio unificado donde acudir en caso de preocupaciones. Otros ejemplos similares son: Participación de Familias Campesinas en Programas de Compensación Forestal, Colombia y Mesa de Buenos Vecinos de Sierra Gorda, Chile. La información que generan las empresas extractivas al realizar buenas prácticas debe de llegar también al público en general a nivel nacional, asegurando que la población tiene conocimiento de los proyectos y del beneficio que estos generan en el desarrollo de las comunidades y la nación.



Nivel Diálogo

El Diálogo como pilar del relacionamiento entre sociedad civil e industria se hace notar en República Dominicana en los procesos de las Mesas Redondas Comunitarias y de los Planes de Desarrollo , mientras que en Argentina nuevamente destacan las Cuencas Sociales , y en el Perú, la Mesa de Diálogo Huari, el Grupo Diálogo de Perú y el caso de Arequipa sobre el Círculo Virtuoso por el Agua . En todos los casos, el Diálogo es el sello indispensable para garantizar el éxito del proyecto en su relación con las comunidades y los gobiernos, por lo que se exhorta a las empresas dominicanas a continuar profundizando en esta práctica de relacionamiento.



Nivel Consulta

En República Dominicana el proceso de Vistas Públicas de la Ley 64-00 es punto de partida de la Consulta, en la cual se expone el proyecto y sus alcances y la población participa, se informa, expresa preocupaciones y se llega a acuerdos importantes. Podría haber un mayor aprovechamiento en los resultados, en la medida que los resultados de la Consulta sean divulgados ampliamente en el ámbito nacional.



Nivel Colaboración

Existe una gran oportunidad de fortalecer el nivel de Colaboración para las empresas en República Dominicana, si se sigue el ejemplo de los proyectos regionales hallados por el diagnóstico: Mesa de Buenos Vecinos Sierra Gorda (Chile) , Cuencas Sociales (Argentina) y Participación de Familias Campesinas en Programa de Compensación Forestal (Colombia). Estos tres casos tienen en común que, además de ser buenos ejemplos de Diálogo y Colaboración con gobierno y sociedad civil, integran varias empresas en una misma zona para trazar planes coordinados y avanzar el desarrollo local. Es una clara muestra del poder de la Colaboración también entre empresas en los procesos extractivos y el alcance positivo que esta acción puede generar para el desarrollo.



Nivel Alianza

Las empresas en República Dominicana han liderado varias alianzas. Para continuar con estos esfuerzos, se recomienda remitirse al caso de Colombia, Participación de Familias Campesinas en Programa de Compensación Forestal no solo es un ejemplo del proceso de relacionamiento entre las partes interesadas, sino que marca un hito ambiental. Este ejemplo demuestra que las alianzas pueden contribuir a la conservación de áreas y rescate de zonas degradadas y que se puede trabajar en Colaboración con las autoridades ambientales. Esta perspectiva ambiental no está muy consolidada en la República Dominicana y es un ejemplo a seguir e implementar en proyectos mineros colindantes con zonas ambientalmente sensibles.

Notas del diagnóstico regional

1. La mayoría de los proyectos extractivos se encuentra en el área rural y las comunidades aledañas son los principales actores afectados con los que se buscan relacionar las empresas en primera instancia. Otros actores importantes son municipios pequeños con un alto índice de población rural. Proyectos cercanos a ciudades medianas o grandes, como en el caso de Arequipa, Perú, o en Chile, son menos frecuentes, ver por ejemplo: Valor Minero, 2017: Los desafíos para el desarrollo futuro de la minería en la zona central, Las Condes; Valor Minero, http://valorminero.cl/site/docs/2017/desafios_desarrollo_futuro_mifffferia_zona_central.pdf.
2. Cameron, Peter, y Michael Stanley, 2017: Oil, gas and mining – A sourcebook for understanding the extractive industry, Washington: The World Bank, p. 19.
3. Los criterios como también los detalles de la metodología empleada se encuentran en el anexo 1.
4. Ver marco metodológico conceptual (anexo 2). Para mayor información ver BID, 2018: Grupo BID – Sociedad Civil, <https://www.iadb.org/es/sociedad-civil/home>
5. Ver Milano, Flavia y Andrea Sanhueza, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para agencias ejecutoras pública y privadas, Washington: BID, <https://publications.iadb.org/handle/11319/7499?locale-attribute=es&>
6. A los fines de esta investigación son los recursos no renovables petróleo, gas y minerales metálicos, estatales en cualquier fase del ciclo de la extracción (prefactibilidad, factibilidad, exploración, explotación)
7. La página web de la ICCM es <http://www.icmm.com/en-gb>
8. Los miembros del ICCM se comprometen a cumplir con 10 principios para contribuir al desarrollo sostenible, ver: ICCM, 2015: Sustainable Development Framework: ICCM Principles, London: ICCM, http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/commitments/revise-2015_icmm-principles.pdf
9. La página web de la IOGP es <http://www.iogp.org>
10. Con este fin, IOGP ha formado diferentes comités, como por ejemplo el de ambiente, que pretende poder responder a las demandas de diferentes actores, ver: IOGP, 2018: Our committees, <https://www.iogp.org/our-committees/>.
11. Wilson, Emma, Sarah Best, Emma Blackmore y Saula Espanova, 2016: Meaningful Community Engagement in the Extractive Industries, London: International Institute for Environment and Development, <http://pubs.iied.org/pdfs/16047IIED.pdf>.
12. Por un lado, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos fueron lanzados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, junto con empresas y algunas organizaciones no gubernamentales, en 2000, ver: Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, 19 de diciembre del 2000, http://voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios_espanol.pdf. Son los únicos estándares de Derechos Humanos que están diseñados exclusivamente para el sector extractivo. Actualmente, se han adherido 30 empresas a los principios, ver: Voluntary Principles, 2018: For companies, <http://www.voluntaryprinciples.org/for-companies/>. Por otro lado, en 2011 las Naciones Unidas publicaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que se aplican a los Estados y a todas las empresas transnacionales y de otro tipo, ver: Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas, 2011: Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos – Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar, remediar”, Nueva York / Ginebra: NNUU, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf.
13. Salmón, Elizabeth (coord.), 2016: La Progresiva Incorporación de las Empresas en la Lógica de los Derechos Humanos. Lima: Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDHPUCCP), p.17-18.
14. Diferentes estudios constatan los retos de una mayor vinculación de la economía local con el sector extractivo en los países de América Latina. Ver por ejemplo: Rudas, Guillermo, 2014: Notas sobre la minería de carbón a gran escala en Colombia, en: FES (Friedrich Ebert Stiftung): La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales, Análisis 1/2014, p. 5-22. Albriue, Ramiro, 2012: La macroeconomía de los recursos naturales en América Latina, en: Albriue, Ramiro; Andrés López, y Guillermo Rozenwurcel (coord.) Los Recursos Naturales como Palanca del Desarrollo en América Del Sur: ¿Ficción o Realidad? Montevideo: Red Mercosur de Investigaciones Económicas, p. 105-147.
15. Ed O’Keefe, director de Synergy Global, en una entrevista realizada por Sarah Busque, el 10 de diciembre de 2013, en: Borealis, 2013: Claves para mejorar las prácticas en las relaciones comunitarias, <https://www.boreal-is.com/es/blog/mejorar-relaciones-comunitarias/>.
16. Wilson 2016, cit. arriba.
17. Ibid.
18. ICCM, 2012: Mining’s contribution to sustainable development, InBrief, Junio 2012). Ver también: López-Morales, José Satsumi, y otros, 2017: Strategies of social responsibility in Latin America: a content analysis in the extractive industry, en: Ad-Minister (Universidad Eafit), No. 31 julio a diciembre 2017, pp 115-135.
19. Oxfam Internacional y Social Capital Group (SCP), 2007: Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero en el Perú.
20. Es importante diferenciar el gobierno nacional como poder ejecutivo de otros actores estatales como el poder judicial o el poder legislativo. El análisis a continuación se refiere al poder ejecutivo exceptuando cuando sea señalado de otra manera.
21. Ver Penfold, Michael y José Luis Curbelo, 2013: Hacia una nueva agenda en inversión extranjera directa. Tendencias y realidades en América Latina, Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 10 / 2013. Corporación Andina de Fomento (CAF).
22. Medina, Leandro, 2010: Efectos dinámicos de los precios de las materias primas en las posiciones fiscales de América Latina, CAF Working Papers No 2010/02.
23. Marczak, Jason y Peter Engelke, 2016: América Latina y el Caribe 2030: Escenarios futuros, Washington: BID, p. 21.
24. Datos de los diagnósticos de este estudio. Estas cifras no incluyen el empleo indirecto.
25. Monge, Carlos, 2017: Minería y marco institucionales en la región andina, Lima: NRGi / GIZ, p. 3-14.
26. Marczak 2016, cit. arr., p. 21
27. El único país de este estudio que no ha ratificado el convenio 169 es la República Dominicana.
28. En Argentina, no existe norma legal que regula el convenio. En México, la reforma constitucional de 2011 incorporó el Convenio 169 de la OIT a la constitución que está regulado mediante un protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), publicado mediante decreto, ver: Castillo Lara, Clara, 2017: La constitución mexicana y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en: Alegatos, No. 97, p. 575.

29. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
30. En Chile, hay un Ministerio de Minas y otro de Energía.
31. CONADI, 2018: <http://www.conadi.gob.cl/>
32. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
33. Salinas Alvarado, Carlos Eduardo, 2011: La consulta previa como requisito obligatorio dentro de trámites administrativos cuyo contenido pueda afectar en forma directa a comunidades indígenas y tribales en Colombia, consultado en: <https://revistas.ueh.ueh.edu.co/index.php/derest/article/view/3019/3055>.
34. Wilson, Emma, 2016, cit. arriba.
35. Ibid.
36. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
37. De hecho, "en muchos países de América Latina las consultas populares sobre minería se han convertido en un conflicto entre gobiernos nacionales, por un lado, y gobiernos locales y actores sociales", ver: Dietz, Kristina, 2017: Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. El caso de La Colosa, en: Colombia Internacional (93), 93-117, p. 96.
38. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), 2014: Pactos Igualdad – Hacia un futuro sostenible, p. 294 - 298.
39. Sanborn, A. Cynthia, y Juan Luis Dammert, 2013: Extracción de recursos naturales, desarrollo económico e inclusión social: Perú, Americas Quarterly, p. 26. Perry, Guillermo y Mauricio Olivera, 2009: El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en Colombia, CAF, documentos de trabajo 2009/06.
40. Mayores ingresos para los gobiernos locales no necesariamente se traducen en una mejora de la calidad de vida. Ver por ejemplo: Paredes Gonzales, Maritza Victoria, 2016: Los efectos del boom de las industrias extractivas en los indicadores sociales – países andinos, Natural Resource Governance Institute. Ministerio de Minería, Comisión Chilena de Cobre, 2013: Minería en Chile: impacto en regiones y desafíos para su desarrollo; Chile.
41. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
42. IIED, y otros (International Institute for Environment and Development, Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, World Business Council for Sustainable Development), 2002: Abriendo brecha: minería, minerales y desarrollo sustentable, IIED, p.224.
43. Respecto a las diversas necesidades de formación, ver por ejemplo: CEPAL / UNCTAD, 2003: Guía para la gestión de las autoridades locales de pueblos y distritos mineros de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, consultado en: <https://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/13966/lcr2114e.pdf>.
44. Datos extraídos de los diagnósticos de cada país que forman la parte central de esta publicación.
45. IIED, y otros, 2002, cit. arriba, p. 204.
46. Astorga, Eduardo, Francisco Carrillo, Mauricio Folchi, Magdalena García, Bernardo Grez, Bernardita McPhee, Claudia Sepúlveda, y Hans Stein, 2017: Resumen ejecutivo informe final proyecto: evaluación de los conflictos socioambientales de proyectos de gran tamaño con foco en agua y energía para el período 1998 – 2015, Santiago de Chile: Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), p. 12-13.
47. Watkins, Graham, Sven-Uwe Mueller, Hendrik Meller, María Cecilia Ramirez, Tomás Serebrisky, Andreas Georgoulas, 2017: Lecciones de cuatro décadas de conflicto en torno a los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, Washington: BID, p.20-1.
48. Davis, Rachel y Daniel Franks, 2014: Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector, Harvard: Harvard Kennedy School.
49. Ibid., p. 21.
50. Wilson, Alana y Miguel Cervantes, 2013: Survey of Mining Companies 2013: Vancouver: Fraser Institute.
51. Watkins et al 2017, cit arriba, p.5
52. Saade, Hazin, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú, Santiago de Chile CEPAL.
53. Franks et al. 2014, cit. arriba, p. 7576
54. Ibid
55. CEPAL: Argentina: Perfil Nacional Económico, http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=ARG&idioma=spanish.
56. Elaborado sobre la base de datos del INDEC: https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2&id_tema_3=39, según categoría: Minas y Canteras.
57. Ley N° 23.548 – Coparticipación Federal de Impuestos Período 2017 (1): <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/recursos/esquemas/ley23548.pdf>.
58. Cabe destacar que el sector de hidrocarburos tiene una mayor preponderancia en la cantidad de puestos de trabajo registrados con un 66,6% de los empleos registrados en 2016, en comparación con los 33,4% de los empleados de la industria minera metalífera para el mismo año. Elaborada sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/novedades/novedad_empleo.asp
59. Jueguen, Francisco, 2017: El desempleo terminó 2016 en 7,6%, según el Indec, en La Nación, 16 de marzo de 2017, <https://www.lanacion.com.ar/1994231-el-desempleo-termino-2016-en-torno-al-76-segun-el-indec>. Según este artículo, la PEA fue de 18 millones de personas en 2016.
60. Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, www.noalamina.org.
61. Fundación Cambio Democrático, 2017: Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales, Capital Federal, <http://cambiodemocratico.org/2017/02/07/plataforma-argentina-dialogo-para-uso-sustentable-recursos-naturales/>.
62. El Atlas de Justicia Ambiental es liderado por Leah Temper y Joan Martinez Alier y coordinado por Daniela Del Bene, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su propósito es recolectar historias de comunidades que luchan por la justicia ambiental en todo el mundo. Los datos son enviados desde los diferentes países por academia, ciudadanos preocupados, comités informales y organizaciones no gubernamentales. Un equipo de edición verifica los datos. Es importante mencionar que el tipo y el número de los conflictos registrados depende de la perspectiva de los actores que envían los datos por lo que no se trata de un dato objetivo. En este documento, se emplean los datos del atlas cuando no existe una cifra más confiable en el país, como es el caso de Argentina. Para mayor detalle de la metodología del Atlas, ver: Leah Temper, Daniela del Bene and Joan Martinez-Alier. 2015. Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. Journal of Political Ecology 22: 255-278. El link de acceso al Atlas de Justicia Ambiental es: <https://ejatlas.org/>.

63. CIPPEC, Fundación Vida Silvestre, y Consejo Empresarial Mendocino, 2015: Minería responsable para el crecimiento con equidad. El caso de Mendoza, <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1052.pdf>.
64. Chubut (Ley 5001, 2003), Tucumán (Ley 7879, 2007), Mendoza (Ley 7.722, 2007), La Pampa (Ley 2349, 2007), Córdoba (Ley 9526, 2008), San Luis (Ley 634, 2008), Tierra del Fuego (Ley 853, 2012)
65. Conflicto Famatina: desde 2004, se realizan en Famatina, provincia de La Rioja, acampes, marchas y cortes de ruta para impedir el paso a la mina a funcionarios del Gobierno y representantes de las empresas. Así la población ha logrado impedir los proyectos de compañías como Barrick Gold, Osisko Mining Corporation, Shandong Gold y, el de la salteña Midais tras la pancarta de "El Famatina no se toca" Conflicto Esquel: en julio de 2002, la minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto ubicado a diez kilómetros de esta ciudad. Distintos grupos de vecinos comenzaron a organizarse. En octubre de 2002 confluyeron en una asamblea en la Escuela Normal y en noviembre nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Luego de varias marchas, el Concejo Deliberante aprobó una consulta popular. El 23 de marzo de 2003 el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó la explotación del yacimiento de oro y plata. Si bien la consulta no era vinculante los resultados hicieron que se suspendiera la ejecución del proyecto.
66. Velarde Ponce de León, Claudia, 2018: Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina, <https://aida-americas.org/es/blog/defendiendo-comunidades-del-avance-del-fracking-en-argentina>.
67. Se han identificado una serie de otras prácticas que no han podido ser validadas en el marco de este estudio. Estas experiencias se encuentran en el anexo 3.
68. La investigación de campo concluyó en 2017, por lo que se puede asegurar la duración de la buena práctica solo hasta este año, lo que no excluye la posibilidad de que sea vigente en el futuro. Esta observación es válida para todas las buenas prácticas.
69. Este espacio es accesible a la comunidad y ésta ha planteado dentro del mismo problemáticas a las cuales se les ha buscado soluciones (falta de leña - donación, falta de capacitación minera - aula móvil, falta de comunicación - wifi libre para toda la comunidad)
70. La innovación se refiere a prácticas que fueron novedosas al momento de su validación en el país respectivo.
71. Cada buena práctica fue evaluada según las dimensiones participación, pertinencia y sostenibilidad en base a indicadores diseñados anteriormente. Para mayor información referirse al marco conceptual y metodológico, 4.3. (anexo 2).
72. Todas las buenas prácticas que incluyen el diagnóstico fueron analizados según la consideración de los siguientes enfoques: enfoque participativo, enfoque de regulación de derechos y obligaciones; enfoque de desarrollo sostenible; enfoque de diversidad; enfoque de igualdad de género; enfoque de transformación de conflictos. Las definiciones se pueden revisar en el marco conceptual (anexo 2). Si los enfoques no son mencionados en el análisis de la buena práctica, significa que no se han encontrado elementos que indican su inclusión en la implementación de la buena práctica.
73. Boon, Johannes, 2017: "Corporate Social Responsibility, Relationships and the Course of Events in Mineral Exploration - an Exploratory Study", Carleton University, Johannes Boon, Ontario, p. 194.
74. Ibid.
75. Información suministrada por PAE.
76. Cámara Argentina de Empresarios Mineros: HMS, <http://www.caem.com.ar/hms/>.
77. Solo a modo de ejemplo, puede mencionarse a provincia de La Rioja con su conflicto en Famatina antes mencionado y la postura del gobernador de la provincia. DyN, 2011, Beder Herrera les pidió a los ambientalistas que se "dejen de joder" con la minería, Clarín Noticias, 31/05/2011, https://www.clarin.com/medio_ambiente/Beder-Herrera-ambientalistas-joder-mineria_Q_Skl-TiWawXx.html.
78. Una organización importante es Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). FARN ha realizado diferentes estudios, entre otros sobre la explotación de Litio. Respecto a las actividades extractivas sostienen: Los efectos sociales y ambientales de este tipo de actividades son demoledores: destrucción ecológica, pérdida de bosques naturales, deterioro del suelo, contaminación por agroquímicos, desplazamiento de comunidades locales, nula generación de empleo de calidad e incluso violación de derechos, entre otros. Desde FARN afirmamos que no existen políticas extractivas que sean amigables con la sociedad, ni con el ambiente (<https://farn.org.ar/actividades-extractivas>).
79. Un ejemplo es la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, un movimiento vecinal que surgió en la localidad de Esquel, Provincia de Chubut y se extendió a otras localidades del país. Según su página WEB, ya se encuentran en 15 lugares del país. No posee una organización formal con cargos y funciones. Sus acciones y su presencia como grupo opositor a la minería son muy fuertes en Argentina. Para mayor información, véase: Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el No a la Mina 2002-2017, cit. arr.
80. Universidad Nacional de San Martín, <http://www.unsam.edu.ar>
81. Puede mencionarse como ejemplo, las Universidades de San Martín y Tres de Febrero que realizaron durante varios años capacitaciones a los docentes de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia de la mina Bajo La Alumbrera
82. Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación, 2015: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Tierras y registro nacional de comunidades indígenas, <https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/08/6.-INAI-Tierras-y-registro-nacional-de-comunidades-indigenas.pdf>
83. Por ejemplo, referente a las instancias de participación en el marco del Informe de Impacto Ambiental. Ejemplos son: Ley N° 123 de Evaluación del Impacto Ambiental de Buenos Aires, última modificación publicada el 18/05/2012. Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, provincia de Santa Cruz, publicada el 21/08/2003. Ley 10.208. Política Ambiental Provincial (Córdoba), publicada el 27/06/2014.
84. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016: Informe del estado de ambiente 2016, Buenos Aires. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mayds_informe_estado_ambiente_2016_baja_1_0.pdf.
85. Covo, María Julia, 2013: Derecho de minería y energía - El principio de congruencia de la ley general del ambiente en el Derecho Minero, en: Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; año 10, no. 43, p. 151-160; p. 153
86. La producción de petróleo y gas es marginal en Chile y la autora no encontró cifras macroeconómicas que incluyen el petróleo. La producción petrolera se concentra en ENAP, una empresa del Estado, cuyo objeto es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Para la producción de Gas Natural existen 10 empresas agrupadas en un gremio. El reporte de sustentabilidad de ENAP señala que la producción de petróleo en Chile, (Región de Magallanes) alcanzó 987 millones de barriles para 2016; en tanto, la producción de gas natural en Chile (Magallanes), alcanzó a 1.004 millones de metros cúbicos estándar (5.909.500 barriles equivalentes). Las exportaciones de ENAP llegaron a 0,42 millones de metros cúbicos de productos derivados del petróleo, lo que equivale al 3,8% de la producción total de sus refinerías.

87. Consejo Minero, 2018: Cifras actualizadas de la minería, <http://dev.consejominero.cl/wp-content/uploads/2018/03/Cifras-actualizadas-de-la-miner%C3%ADa-Marzo-2018.pdf>.
88. Comisión Nacional de Productividad 2016: Productividad de la Gran Minería el Cobre, <http://www.comisiondeproductividad.cl/productividad-de-la-gran-mineria-del-cobre/>
89. Consejo Minero, 2018, cit. arr.
90. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
91. Consultado en: Sociedad Nacional de Minería, El nivel de empleo en la minería es el más bajo de los últimos siete años, <http://www.sonami.cl/site/noticias/el-nivel-de-empleo-en-la-mineria-es-el-mas-bajo-de-los-ultimos-siete-anos/>.
92. Comisión Chilena del Cobre, 2017: Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Metales 1997-2016, Santiago de Chile, <https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/17/Anuario-%20avance7-10-7-17.pdf>.
93. Comisión Nacional de Productividad 2016, cit. arr.
94. -Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015: Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, Santiago de Chile, <http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/989/libro.pdf?sequence=5>.
95. Comisión Minería y Desarrollo de Chile Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014: Minería. Una Plataforma de futuro para Chile, http://valorminero.cl/site/docs/2017/mineria-una-plataforma_futuro_para_chile.pdf.
96. Hallazgos Mesa de Trabajo Industrias extractivas realizada el 18 de agosto 2017 en Santiago de Chile para este estudio.
97. Alianza Valor Minero, Seminario Valor Minero Inversión y Diálogo para el Desarrollo, http://valorminero.cl/site/docs/2017/informe_seminario_inversion_dialogo_desarrollo.pdf.
98. Informe Sistematización Caracterización Socio-Ambiental Proyecto Acuerdo Territorial Para El Desarrollo - Localidad De Sierra Gorda. Agencia de Cambio Climático- Alianza Valor Minero septiembre 2017.
99. Ibid.
100. No se cuenta con información de los montos de inversión social de las empresas en Sierra Gorda.
101. Alianza Valor Minero es una institución público-privada que reúne a múltiples actores con el objetivo de generar las condiciones para transformar a la minería chilena en una plataforma de desarrollo virtuosa, inclusiva y sostenible, Valor Minero, <http://www.valorminero.cl/valor-minero/>
102. Chile Transparente, Transparencia Caimanes, Santiago de Chile, <http://www.chiletransparente.cl/project/transparencia-caimanes/>.
103. Nueva Unión, 2017: Corproa elige a Nueva Unión como "Empresa Destacada del Año", <http://www.nuevaunion.cl/noticias/2017/corproa-elige-a-nuevaunion-como-empresa-destacada-del-ano>.
104. Ibid.
105. Política de Pueblos Indígenas Nueva Unión. Consultada en : Nueva Unión, Sustentabilidad, <http://www.nuevaunion.cl/sustentabilidad>.
106. Desarrollo Futuro de la minería en la zona Central. Diagnóstico y recomendaciones para la sostenibilidad. Alianza Valor Minero. Noviembre 2017
107. Otras iniciativas entre diferentes sectores son Consejo Nacional de la Innovación para el Desarrollo, Consejo Consultivo para la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Grupo de Exploraciones Sustentables, Grupo de Trabajo Agenda 2030, Mesa de trabajo Mujer, Minería y buenas prácticas del ministerio de Minería.
108. Alianza Valor Minero, cit. arr.
109. Alianza Valor Minero, cit. arr.
110. Ministerio de Minería, Misión Institucional, <http://www.minmineria.gob.cl/mision-institucional/>.
111. Mapa de las organizaciones de la sociedad Civil 2015. Centro de Políticas Públicas Universidad Católica (2016).
112. Villalobos, Fernanda, 2017: Ambientalistas y rechazo a Dominga: Quiénes gobiernan "están tomando las decisiones correctas", Santiago de Chile, <http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html>.
113. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena , Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas , <http://www.conadi.gob.cl/registro-de-comunidades-y-asociaciones-indigenas>.
114. Portal Minero, 2014: Corte rechaza recursos contra proyecto minero El Morro, <http://www.portalminero.com/display/NOT/2014/04/29/Corte+rechaza+recursos+contra+proyecto+minero+El+Morro?showComments=true&showCommentArea=true>.
115. OIT (2014) Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión. Matías Abogabir. ES ESTO UNA FUENTE DE LIBRO O DE PÁGINA WEB? POR FAVOR INCLUYA TODOS LOS DATOS SEGÚN EL FORMATO ENVIADO.
116. Delamaza, Gonzalo, 2011: Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Revista de la Universidad Bolivariana, volumen 10, N°30, 2011, pp. 45-75.
117. Ministerio de Desarrollo Social, 2013: Decreto Supremo N° 66 .
118. OIT (2014) Matías Abogabir. Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en proyectos de inversión.
119. DANE, 2016: Atlas Estadístico de Colombia, Bogotá, <http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/>.
120. Incluye carbón, níquel y petróleo y sus derivados de las exportaciones tradicionales del país para el 2016. Ibid.
121. No existe información oficial para establecer una repartición de ingresos a nivel nacional o central.
122. De acuerdo con las cifras del DANE, para 2016 el total de la población ocupada es de 22,8 millones. La definición de la población ocupada incluye personas en una de las siguientes situaciones: 1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. 2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. 3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.
123. Observatorio de las industrias extractivas en Colombia, 2015: El sector extractivo en Colombia 2014, Bogotá: Foro Nacional por Colombia, y otros, http://media.wix.com/ugd/ef61f6_3c07a995db4a4f5b98b151e3a370e1c0.pdf.
124. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr
125. Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), 2017: Tendencias de la Conflictividad Socioambiental en América Latina y Propuestas para su Abordaje, Quito, https://www.flla.net/publicaciones/doc_details/320-tendencias-de-la-conflictividad-socioambiental-en-am%C3%A9rica-latina-y-propuestas-para-su-abordaje.html.
126. Fundación Foro Nacional por Colombia, 2017: La agenda de la sociedad civil frente a las industrias extractivas en Colombia, Bogotá: Foro Nacional por Colombia y Natural Resource Governance Institute, <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/reporte-colombia.pdf>.

127. La Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 ("PND") clasifica los tipos de minería en minería de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería.
128. Fundación Avina y Gestión Ambiental Estratégica, 2012. Elementos diagnósticos para una caracterización de la minería en Colombia. Bogotá, Colombia. Mesa de Diálogo permanente de Minería en Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?
129. Ley 34 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
130. Morales, Lorenzo, 2017. La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible, Bogotá: Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes, http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/envt-colombia-esp_web-res_final-for-email.pdf
131. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Bogotá, <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-II-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>.
132. Morales 2017, cit arr.
133. Jiménez, Carlos Mario, 2017: En 6.3 % aumentó producción de carbón en el Cesar, <http://elpilon.com.co/en-6-3-aumento-produccion-de-carbon-en-el-cesar/>.
134. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpocesar es la autoridad encargada por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país.
135. Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
136. Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica. Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Bogotá Colombia. En bibliografía consta el link: Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente responsable en Colombia. Documento de trabajo Mesa de Diálogo Permanente Colombia. 2013. Disponible en: <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/-NO-SE-PUDE-ACCEDER-A-ESTA-PAGINA-FORBIDDEN>
137. <?> Quijano, Pedro. Gestión Ambiental Estratégica Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. Bogotá, Colombia. En bibliografía consta el link: Documentos de Trabajo Mesa de diálogo Permanente de Colombia, 2013. <https://www.mesadedialogopermanente.org/mesa-de-dialogo-permanente-colombia/productos-de-la-mdp/-NO-SE-PUDE-ACCEDER-A-ESTA-PAGINA-FORBIDDEN>
138. <?> Ministerio de Minas y Energía: Relacionamento Territorial, <https://www.minminas.gov.co/relacionamiento-territorial>.
139. <?> La Resolución 0322 de 2015 adopta el manual específico de funciones y competencias del Ministerio del Interior.
140. <?> La Ley 1444 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como organismo técnico con autonomía administrativa y financiera -sin personería jurídica- para el estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales. La ANLA debe asegurar que los proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento cumplan con la normativa ambiental (Decreto 3573 de 2011).
141. <?> Departamento Nacional de Planeación, 2016: Evaluación de operaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que mida la capacidad con la que cuentan para lograr sus objetivos y proponer acciones de mejora para el fortalecimiento integral de las mismas y el mejoramiento de la gestión ambiental en el país, Bogotá, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/CAR_Producto_4_Informe_Resultados_v20161128.pdf
142. <?> Ministerio de Ambiente, 2013: Decreto 2613 de 2013 por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa, http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2013/dec_2613_2013.pdf.
143. <?> Lloreda Francisco, presidente ACP. Septiembre 2017. III Congreso de la Asociación Colombiana de Productores de Petróleo ACP. Bogotá, Colombia. ¿Es esto una fuente o un comentario adicional?Gestión Ambiental Estratégica. Informe a las Autoridades Ambientales ANLA y Estratégica, febrero 2014. Bogotá, Colombia. Grupo Prodeco.
144. La fuente de todas las cifras de 2016 es: PEMEX, 2016: Anuario Estadístico 2016, México, pp. 5-6 y 15-16, <http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/anuario-estadistico-2016.pdf>. La fuente del valor de 2010 es: González, Ixel, 2015: Petróleo aporta menos al crecimiento del PIB en 2014, México, <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleo-aporta-menos-al-del-pib-en-2014.html>.
145. Los datos nacionales estadísticos no desglosan por industria de hidrocarburos.
146. Centro Mexicano para la Filantropía, 2017: Número de organizaciones en cada estado por figura legal, <http://200.57.117.52/Directorio2/Estadisticas/frmoOrganizacionesFiguraLegal.aspx>.
147. El amparo en un amplio sentido se revela como un conjunto de actos procesales o procesos que culminan en resolución judicial o sentencia, que constituye su causa final común, y en un sentido estricto, como un derecho, como una potestad que tiene la persona para hacer que se repare en su favor cualquier violación a sus garantías individuales. La Constitución mexicana de 1917 establece como órgano de control constitucional al Poder Judicial Federal, facultándolo para modificar los actos de autoridades o leyes violatorias de garantías individuales, y dispone que a través del amparo pueden impugnarse actos o leyes de cualquiera de los tres Poderes, creando así el juicio de amparo en contra, también, de resoluciones judiciales. Consultado en: Ensayos Universitarios GMORR, 2009: Juicio de amparo en México, <https://www.gestiopolis.com/juicio-de-amparo-en-mexico/>
148. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
149. Enciso, Angélica, 2016: Hay en México 420 conflictos socioambientales: Investigador, <http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/sociedad/038nIsoc>.
150. David Shields, analista, periodista y consultor de la industria energética. Director General del proyecto Energía a Debate; y Jorge Arriaga, PhD en Desarrollo Regional por la Universidad de la Sorbona en París; fue Subgerente de Atención a Organizaciones Sociales en PEMEX y actualmente es consultor para la industria energética.

151. "En primer lugar, la ASF (Auditoría Superior de la Federación - SC) señala que existen vacíos normativos, toda vez que los Lineamientos en materia de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos no establecen líneas claras sobre el seguimiento de la aplicación de los recursos y bienes. Lo anterior deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios", en: De la Fuente López, Aroa, 2017: Donativos y Donaciones de PEMEX: Deficiencias e Irregularidades, México, pp.2-3, <http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ASF-Donativosydonaciones.pdf>.
152. Morris, Stephen, 1992: Corrupción y Política en el México Contemporáneo, México, pp. 76-79, https://books.google.com.mx/books?id=H1_dodEHuloC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=paternalismo+en+mexico+pemex&source=bl&ots=Vrtsu6fuc0&sig=_oDNsdtrNbJW16XNi7jQB9VFM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTqMkt5_rYAhWQ7VMKHdw1CYyQ6AEIzDAJ#v=onepage&q=paternalismo%20en%20mexico%20pemex&f=false.
153. Diario Oficial de la Federación, 2014: Ley de Hidrocarburos, México, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014.
154. Entrevistas con académicos y académicas expertos en energía.
155. Entrevistas con actores sociales en el marco de este diagnóstico.
156. Secretaría de Energía, 2016: 4º Informe de Labores de la Secretaría de Energía 2015-2016, México, pp. 69, http://transparencia.energia.gob.mx/rendicion_cuentas/archivos/SENER-4oInformeLabores.pdf.
157. A noviembre del 2017, el gasoducto aún tenía parada la operación en el tramo Guaymas- El Oro. Consultado en: Zúñiga, Norma, 2017: Pide CFE liberar ducto Guaymas-El Oro, México, <http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1262784&md5=0164b194d21007299490c50495577918&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>.
158. Resolutivo de la consulta previa, libre e informada del gasoducto Sonora. Consultado en: Gob.mx, 2015: Resolutivo de la CPLI a la Tribu Yaqui, México, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194673/Resolutivo_de_la_CPLI_a_la_Tribu_Yaqui.pdf.
159. Comentarios al diagnóstico del Director General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía.
160. Tribunales federales ordenaron a los tres órganos de gobierno frenar el gasoducto. Consultado en: Escobar, Amalia, 2017: Tribunal ordena a secretarías frenar obras de gasoducto, México, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/27/tribunal-ordena-secretarias-frenar-obras-de-gasoducto>.
161. Las entrevistas, con los diferentes actores en cada proyecto y con funcionarios de organizaciones de la sociedad civil permiten realizar esta aseveración, que de ninguna manera pretende ser generalizada.
162. Es decir, las formas históricas clientelares han tenido que cambiar por formas basadas en acuerdos internacionales para llevar a cabo la consulta indígena, por ejemplo, en donde la información previa y la consulta son un principio que se debe respetar.
163. Empresa filial de PEMEX que financia el proyecto.
164. El Plan de Gestión Social se incluye en los lineamientos que establece la Secretaría de Energía (SENER) para la evaluación de impacto social contemplada en la Ley de Hidrocarburos. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016: Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el sector energético, www.cofemeresimir.gob.mx/expediente/14565/mir/34590/archivo/948300.
165. En los lineamientos de la Evaluación de Impacto Social (Evis), uno de los requisitos es que la empresa debe presentar su Plan de Gestión Social dentro de la Evis.
166. Informe de labores de la Secretaría de Energía, Marco Legal y Participación en EITI y otros espacios regionales y bilaterales. Consultado en: Secretaría de Energía, 2016, cit. arr., p. 5 y p. 160.
167. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf.
- 168.
169. Se retoma esta ley en el reporte, ya que el gas natural es un insumo que va en crecimiento para la generación de energía eléctrica. Las atribuciones son claras para el momento de la extracción y transporte del gas y cada instancia reguladora.
170. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2018, México, <https://www.gob.mx/sgm>. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018: Censos Económicos, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), México, <http://www.beta.inegi.org.mx/app/saic/>.
171. Estas cifras no incluyen información de las empresas prestadoras de servicios y tampoco incorpora información de la minería artesanal y de pequeña escala.
172. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 2017: Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, México, <https://www.gob.mx/sedatu>.
173. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
174. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018: Informe Anual 2018, México.
175. Saade Myriam, 2013: Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los Casos de Colombia, México y el Perú. Santiago de Chile, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5369/LCL3706_es.pdf;jsessionid=C8F9D8F34833870162349695B7F0FE7F?sequence=1.
176. Atlas de Justicia Ambiental, cit. arr.
177. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2013: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México.
178. Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México.
179. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2017: Informe Anual 2017. México.
180. CCC forma parte de una red de organizaciones denominada Partners.
181. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
182. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2018, cit. arr.

183. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 1990: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, México, <http://www.contactopyme.gob.mx/mercados/info/secofi.html>.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018, cit. arr.
184. Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
185. Los pasivos ambientales fueron el resultado de las operaciones de otras empresas entre las que se encuentran ASARCO, la cual posteriormente vendió sus concesiones a Grupo México. Durante la operación de estas empresas, México carecía de regulación ambiental, por lo que la remediación de los pasivos ambientales no era una exigencia para las empresas.
186. Un total de 490.000 m3 de suelo vegetal recuperado y almacenado para acciones de restauración.
187. Este proyecto tendrá un costo de más de 2 millones de dólares, ya que se requiere retirar y encapsular los contaminantes que fueron depositados por las otras empresas como parte del proceso de remediación. Es relevante destacar que New Gold, como estrategia para garantizar y cumplir con los compromisos definidos como parte de su plan participativo de cierre ambiental, cuenta con una fianza pagada ante la tesorería de la Federación por casi 30 millones de dólares que respalda el 100% del cierre biofísico y socioeconómico. De manera que el "Patio Paseo Victoria" es hoy en día una de las obras de recuperación de espacios urbanos más importantes en la entidad, así como un ejemplo palpable del legado que New Gold Minera San Xavier dejará para las generaciones actuales y venideras en este municipio.
188. Los "Pueblos Mágicos" es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en México desde el año 2001, para promover la oferta turística en el país, en sitios en donde sus habitantes y gobiernos locales han logrado proteger su riqueza cultural, por lo que son reconocidos como sitios que tienen grandes atributos históricos-culturales. En estos lugares se promocionan las artesanías, festividades, gastronomía del lugar, así como productos turísticos basados en la aventura, senderismo o ecoturismo.
189. New Gold Minería San Xavier S.A de C.V Cerro de San Pedro, 2015: Reporte de Sustentabilidad 2015, México, http://s1.q4cdn.com/240714812/files/documents_sustainability/Reporte-de-Sustentabilidad-2015-MSX.pdf.
190. Incluye Sonora (Nacozari, Esqueda, Guaymas y Cananea); Coahuila (Nueva Rosita); San Luis Potosí (Charcas y San Luis Potosí); Chihuahua (Santa Bárbara y Santa Eulalia); Michoacán (Angangueo); Zacatecas (Sombrerete); Guerrero (Taxco); Guanajuato (León); Oaxaca (Juchitán); Campeche (Ciudad del Carmen), y Baja California Sur (Guerrero Negro).
191. *Industria*: los representantes del sector industrial incluyen a Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) y la Cámara Minera de México (CAMIMEX). Estas organizaciones agrupan a las principales empresas del sector de hidrocarburos en México y a las empresas mineras que generan aproximadamente 90% de la producción minera del país. Sociedad civil: los representantes de la sociedad civil fueron elegidas por un grupo de aproximadamente 40 OSC, que fueron invitadas e informadas en talleres nacionales y regionales sobre la intención del gobierno de adherirse a este estándar por un grupo impulsor conformado por Transparencia Mexicana, FUNDAR y PODER. Se eligió un grupo de representantes y suplentes que está conformado por: PODER, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSTA), Transparencia Mexicana (TM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. En la actualidad, ALCOSTA no forma parte de este grupo de representantes y suplentes. El gobierno conformó un Grupo Intersecretarial (GI) integrado por medio de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) (por medio de la Subsecretaría de Minería) y la Subsecretaría de Hidrocarburos (SENER). Actualmente, la responsabilidad de presidir el GI está a cargo de la Subsecretaría de Minería.
192. USAID, Banco Mundial, Natural Resource Governance Institute, GIZ, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada Británica.
193. Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2016: Informe Anual 2016, México.
- Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2016, cit. arr.
194. Secretaría de Economía (SE), 2016, cit. arr.
195. (1) Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) (Nuevo León), (2) Universidad Veracruzana (Veracruz), (3) Universidad Autónoma de Coahuila (Coahuila), (4) Universidad de Colima (Colima), (5) Universidad de Guanajuato (Guanajuato), (6) Universidad Autónoma del Estado de México (México), (7) Benemérita Universidad de Puebla (Puebla), (8) Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Chiapas), (9) Universidad de Sonora (Sonora), (10) Universidad Autónoma de Puebla (Puebla), (11) Universidad Estatal de Sonora (Sonora), (12) Universidad Politécnica Juvenino Rosas (Guanajuato), (13) Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (Hidalgo), (14) Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Zacatecas), (15) Instituto Tecnológico de Chihuahua (Chihuahua), (16) Instituto Tecnológico de Morelia (Morelia), y (17) Instituto Tecnológico de Querétaro (Querétaro).
196. Unversia México, 2016: Licenciaturas en Ingeniería en Minas, <http://www.universia.net.mx/estudios/ugto/licenciatura-ingenieria-minas/st/152715>.
197. Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Transparencia Mexicana (TM), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero (ALCOSA), los Socios México/Centro de Colaboración Cívica (CCC), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, CartoCritica, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Amigos del Río San Rodrigo, Oxfam, The Nature Conservancy, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Fundación Heinrich Böll, Fundación Desarrollo Sustentable A.C., el Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar) y el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (CIIDES).
198. Saade Myriam, 2013, cit. arr.
- Temper Leah, del Bene Daniela y Joan Martínez-Alier, 2015, cit. arr.
- Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), 2018, cit. arr.
- Gobierno de México, Gobierno de la República, 2014, cit. arr.
- Cámara Minera de México (CAMIMEX), 2018, cit. arr.
199. Díaz, Luis y Morones Guadalupe, 2001: Inversión extranjera; derecho mexicano y derecho internacional, Edición 01, México: Themis.
200. Poder Judicial Federal, 2016, cit. arr.
201. Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2017: Anuario Minero 2016, Lima, <https://es.scribd.com/document/351009672/ANUARIO-MINERO-2016-pdf>.

202. EY, 2018: Informe Final Sexto Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas (Sexto Estudio de Conciliación Nacional – EITI Perú) Períodos 2015 y 2016. Consultoría para la Comisión Multisectorial Permanente del EITI Perú, Lima, http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/VI_INT_2015_2016%20EITI_%20PERU.pdf.
203. Ministerio de Energía y Minas, 2017: Anuario Minero 2016, Lima, p. 118.
204. Lamentablemente no existen cifras accesibles para el sector hidrocarburos.
205. Defensoría del Pueblo, 2018: La Defensoría del Pueblo registró 169 conflictos sociales a diciembre de 2017, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=19531>.
Defensoría del Pueblo, 2017: Reporte de Conflictos Sociales N.º 166, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2018/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-166---Diciembre-2017.pdf>.
206. Lanegra Iván, 2016: ¿Qué está en juego con la elección del Defensor del Pueblo?, Lima, <http://ojo-publico.com/294/que-esta-en-juego-con-la-eleccion-del-defensor-del-pueblo>.
207. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
208. Glave Manuel y Kuramoto Juana, 2007: La minería peruana: Lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber, Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Grade, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, pp. 135-181.
209. Baca Epifanio, 2015: Estudio sobre Marco Normativo Minero en Perú Lima, <http://propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Estudio%20EBaca.pdf>.
210. Participaron el Gobierno regional y Municipalidad Provincial de Arequipa, diez municipalidades distritales, la asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa, la Federación Departamental de Trabajadores, el COFREN, el FREDICON, CONREDE, Comité de Gestión Ambiental de Uchumayo.
211. ONU Mujeres, La mujer y el medio ambiente, <http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/environment>.
212. Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, Por una Minería con Responsabilidad Social y Ambiental en el Perú Un acuerdo fruto del diálogo y las lecciones aprendidas, <http://www.grupodedialogo.org.pe/wp-content/uploads/2015/03/Visión-Minería-2021.pdf>.
213. Cooperación, 2017: Actualidad Minera del Perú, No. 222, <http://cooperacion.org.pe/wp-content/uploads/2017/12/AMP-diciembre-2017.pdf>.
214. Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de los Conflictos y la Gobernabilidad, 2017: Competencias en la atención de conflictos sociales, Lima, <https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=6>.
215. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 2018: Poder Ejecutivo presenta Proyecto de Ley que pretende modificar Ley Orgánica de Hidrocarburos favoreciendo al sector privado y en detrimento de los pueblos indígenas y el medio ambiente, <http://www.dar.org.pe/noticias/poder-ejecutivo-presenta-proyecto-de-ley-que-pretende-modificar-ley-organica-de-hidrocarburos-favoreciendo-al-sector-privado-y-en-detrimento-de-los-pueblos-indigenas-y-el-medio-ambiente/>.
Scurrah Martin y Chaparro Anahí, 2014: La participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos indígenas: Políticas Públicas para un nuevo rol de la minería y los hidrocarburos en el Perú, Lima, <http://www.redge.org.pe/sites/default/files/La%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20y%20la%20consulta%20previa%20en%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20-%20M.%20Scurrah%20y%20A.%20Chaparro.pdf>.
216. CEPAL y OCDE 2016: Evaluaciones del desempeño ambiental Perú. Aspectos destacados y recomendaciones, Santiago, <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40171-evaluaciones-desempeno-ambiental-peru-2016-aspectos-destacados-recomendaciones>.
217. EY, 2018, cit. arr.
218. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 2018: La Participación Ciudadana en la Actividad de Hidrocarburos, http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=3556.
219. Milano Flavia y Sanhueza Andrea, 2016: Consultas Públicas con sociedad civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas, Washington, <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7499/Consultas-publicas-con-sociedad-civil-Guias-para-agencias-ejecutoras-publicas-y-privadas.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
220. Ministerio de Cultura, 2015: Derecho a la Consulta Previa Guía Metodológica para la Facilitación de Procesos de Consulta Previa, Lima, <http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Guia-Metodologica-para-la-Facilitacion-de-Procesos-de-Consulta-Previa.pdf>.
221. Con respecto a los proveedores para la minería, el país no cuenta con datos registrados
222. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Real, Santo Domingo, https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/.
223. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas Económicas- Sector Externo, Santo Domingo, https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/externo/.
224. Datos levantados para este diagnóstico por la consultora apoyados en el Banco Central de la Republica Dominicana, encuestas directas a las empresas metálicas, y el Ministerio de Energía y Minas.
225. El dueño de Falcondo es American Nickel.
226. Ley 176-07
227. Ley 200-04
228. Thomen Ginebra, Cristina, 2012: Informe País - Trabajo Final Diplomatura Industria Extractiva, Vigilancia y Desarrollo Sostenible, Julio 2012, Santo Domingo, República Dominicana.
229. Dirección General de Impuestos Internos, 2015: Ranking de Empresas 2015, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/Ranking%20de%20Empresas%202015.pdf>.
230. Dirección General de Impuestos Internos, 2016: Ranking de Empresas 2016, Santo Domingo D.N, <https://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/estudios/Documents/RankingEmpresas2016.pdf>.
231. Salvo los proyectos de la minera Falcondo, realizados a través de su rama de responsabilidad social Fundación Falcondo que iniciaron en 1989.
232. En 2007 PVDV empezó sus programas de responsabilidad social.
233. Barrick Pueblo Viejo: Estudio demuestra la sostenibilidad de los proyectos sociales implementados por Barrick Pueblo Viejo, Santo Domingo D.N, <http://barrickpuebloviejo.do/noticias/estudio-demuestra-la-sostenibilidad-de-los-proyectos-sociales/2016-10-13/144111.html>.
234. FOMISAR Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros, <http://www.fomisar.com/>.

235. Oro Información, 2017: Las cinco mayores minas de oro del mundo. <https://www.oroinformacion.com/es/OroInformacion/metales/487/Las-cinco-mayores-minas-de-oro-del-mundo.htm>.
236. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
237. Plan de Desarrollo Municipal de Maimón, folleto publicado por el Ayuntamiento de Maimón; Plan de Desarrollo Municipal de Cotuí, folleto publicado por el Ayuntamiento de Cotuí; Plan de Desarrollo Municipal de Fantino, folleto publicado por el Ayuntamiento de Fantino.
238. Los resultados a favor fueron con 86,22% en Maimón, 98,66% en Cotuí y 98,78% en Fantino (véase Planes de Desarrollo publicados por los ayuntamientos de Maimón, Cotuí y Fantino).
239. Son los órganos de participación ciudadana directamente relacionados con la planificación municipal, ver: Malagón, Angela, y Rosa Arlene María, 2012: Guía para la Creación del Consejo Económico y Social Municipal, Santiago de los Caballeros: Federación Dominicana de Municipios, <http://fedomu.org.do/wp-content/uploads/2016/05/Guia-CES-FEDOMU-final.pdf>.
240. Bonilla, Teófilo, 2013: Diputados aprobaron renegociación de contrato con Barrick Gold, <http://elnacional.com.do/diputados-aprobaron-renegociacion-de-contrato-con-barrick-gold/>.
241. Barrick Pueblo Viejo, Responsabilidad Social Corporativa, <http://barrickpuebloviejo.do/responsabilidad-social/responsabilidad-social-corporativa/2016-10-13/122340.html>.
242. El Dinero, 2015: El lado amable de Barrick Pueblo Viejo - La minera dice que su accionar ha sido positivo en la provincia Sánchez Ramírez, <https://www.eldinero.com.do/10147/el-lado-amable-de-barrick-pueblo-viejo/>.
243. Al Momento, 2015: Barrick Pueblo Viejo inicia programa "una Computadora por Niño" en RD, Santo Domingo, <http://almomento.net/barrick-pueblo-viejo-inicia-programa-una-computadora-por-nino-en-rd/>.
244. El Veedor Digital, 2015: ENDA y la Barrick extienden proyecto para reforestar Piedra Blanca-Los Haitises, Santo Domingo, <http://elveedordigital.com/provincias/item/6431-enda-y-la-barrick-extienden-proyecto-para-reforestar-piedra-blanca-los-haitises>.
245. Álvarez, Yulissa, 2017: La piscicultura, un atractivo ecoturístico de Cotuí La actividad, apoyada por la Barrick, impulsa el desarrollo de la provincia Juan Sánchez Ramírez, Cotuí, <https://www.eldinero.com.do/40640/la-piscicultura-un-atractivo-ecoturistico-de-cotui/>.
246. Listín Diario, 2017: Inician trabajos de electrificación, Sánchez Ramírez, <https://www.listindiario.com/economia/2017/10/05/485133/inician-trabajos-de-electrificacion>.
247. Véase: Buena Práctica: 2.7.3.1. Planes de Desarrollo Municipales
248. RD\$2'000.000,00, tasa de cambio del Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) para diciembre 2017.
249. Basado en cálculos estimados de la incubadora por efectos del aumento de empleo producto de las mineras y del aumento estimado de población calculado por The World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos a un 1,7% anual de incremento de población. El link de acceso a The World Factbook es: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
250. Matos, Heidi, 2012: Más de 4 millones de pesos para microempresarios de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, Cotuí, <http://eljacaguero.com/mas-de-4-millones-de-pesos-para-microempresarios-de-sanchez-ramirez-y-monseñor-nouel/>.
251. Acento, 2016: INFOTEP y Fundación Rica entregan Premio Nacional a la Excelencia 2016, Santo Domingo, <https://acento.com.do/2016/sociales/8391590-infotep-fundacion-rica-entregan-premio-nacional-la-excelencia-2016/>.
252. Barrick Pueblo Viejo, Inician proyecto de emprendimiento para personas con capacidades motoras especiales, Sánchez Ramírez, <https://www.barrickpuebloviejo.do/inician-proyecto-de-emprendimiento-para-personas-con-capacidades-motoras/2017-10-20/184050.html>.
253. Severino, Jairon, 2016: Minería aporta RD\$226,023 millones a economía dominicana desde 2010 Su ponderación promedio en el PIB se mantiene en 1.73%, Santo Domingo, <https://www.eldinero.com.do/31719/la-mineria-ha-agregado-rd226023-millones-a-economia-dominicana-desde-2010/>. Conversión a dólares según la tasa de cambio del Banco Central de junio 2016
254. Según censo del 2010. Consultado en: Oficina Nacional de Estadística, 2008: Monseñor Nouel en Cifras Perfil Sociodemográfico Provincial, https://www.one.gob.do/Content/pdf_perfiles/Perfil_monseñor_nouel.pdf.
255. Equivalentes a RD\$335'475.957 a la tasa vigente del Banco Central de la República Dominicana al cierre de diciembre de 2017.
256. Oficina Nacional de Estadística, 2008, cit. arr.
257. Corresponde a RD\$ 54'024.173 según tasa Banco Central RD al 31 diciembre 2017.
258. Wikipedia, 2017: Proyecto Pueblo Viejo, https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Pueblo_Viejo.
259. Barrick Pueblo Viejo, Nuestra historia, <http://barrickpuebloviejo.do/informacion-general/nuestra-historia/2016-10-11/163729.html>.
260. La firma BGC Engineering Inc, de Canadá elaboró el Plan de Cierre para Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) 31 de Julio de 2013, Proyecto No: 0011-159 -. Consultado en: BGC Engineering Inc, 2013: Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo: Mejita, Cumba, Hondo, Pendiente Oeste y Desechos Peligrosos Final,, https://www.mem.gob.do/transparencia/images/docs/documentos/Plan_de_Administraci%C3%B3n_Medioambiental_del_Estado_1era_y_2da_Enmienda/Plan-del-Estado-Original.pdf.
261. Diario Libre, 2007: Contaminación afecta aún entorno de mina Pueblo Nuevo sufre las secuelas de la explotación, <https://www.diariolibre.com/noticias/contaminacion-afecta-entorno-de-mina-INDL148462>
262. Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, <http://camiperd.org/category/documentos/guias-mineras/>.
263. El Día, 2013: Barrick Gold y la historia de un contrato muy complejo, Santo Domingo, <http://eldia.com.do/barrick-gold-y-la-historia-de-un-contrato-muy-complejo/>.
264. Diario Libre, 2014: Expertos se oponen a que el Senado declare Loma Miranda como Parque Nacional Afirman que la decisión sería inconstitucional, Santo Domingo, <https://www.diariolibre.com/noticias/expertos-se-oponen-a-que-el-senado-declare-loma-miranda-como-parque-nacional-ANDL636701>
265. Marcha Verde, <https://marchaverde.com/>.
266. Paula, Elexido, 2017: Marcha Verde: Patrimonio del Pueblo, <http://hoy.com.do/marcha-verde-patrimonio-del-pueblo/>.

267. Fundación Acción Verde, 2009: Declaración de La Comisión Ambiental de la UASD sobre la construcción de una Cementera, <http://www.accionverde.com/declaracion-de-la-comision-ambiental-de-la-uasd-sobre-la-construccion-de-una-cementer/>. Maimón Punto de Encuentro, Presidente de la Comisión Ambiental de la UASD habla sobre la minería en el país (Video), Maimón, <http://maimonpuntodeencuentro.blogspot.com/2015/09/presidente-de-la-comision-ambiental-de.html>
268. EFE, 2014: El padre Rogelio Cruz llama a la desobediencia civil por caso Loma Miranda, Santo Domingo, <https://www.listindiario.com/la-republica/2014/09/04/336184/el-padre-rogelio-cruz-llama-a-la-desobediencia-civil-por-caso-loma-miranda>.
269. Hoy, 2017: Marcha Verde reclama pago de RD\$3,000 millones a provincia Sánchez Ramírez, <http://hoy.com.do/marcha-verde-reclama-del-gobierno-pago-de-rd3000-millones-a-provincia-sanchez-ramirez/>.
270. Participación Ciudadana: ¿Qué es PC?, https://pciudadana.org/?page_id=4893.
271. Ver Grupo BID-sociedad civil Estrategia de Relacionamiento, 2018
272. Ley 134 de 1994, por medio de la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
273. Publique lo que pagan, 2018: Objetivos, encontrado en: <http://www.publishwhatyoupay.org/es/quienes-somos/objetivos/>.
274. En la República Dominicana, Planes de Desarrollo Municipales (2.7.3.1., p. 137), Conformación de Agencia de Desarrollo en Chile (2.1.3.3., p.29), Mesa de Diálogo de Huari, Perú (2.6.3.3., p. 120).
275. Devonshire Initiative, 2017: About us, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/about-us/>.
276. Devonshire Initiative, s/a: Partnering and Partnerships: lessons learned in the DI, encontrado en: <http://devonshireinitiative.org/wp-content/uploads/DI-Partnership-Lessons-Learned-FINAL-.pdf>.
277. Es una plataforma de intercambio y comunidades de aprendizajes sobre el tema de conservación de la biodiversidad, apoyada por GEF, Convención sobre Diversidad Biológica, UN Environment y PNUD, ver: NBSAP Forum, 2018: Welcome to the NBSAP Forum, encontrado en: <http://nbsapforum.net/>.
278. Goxi es una comunidad virtual sobre gobernanza en industrias extractivas, apoyada por el Banco Mundial y PNUD, ver: GOXI, 2018: Guidelines for how to use GOXI, encontrado en: www.goxi.org.
279. GOXI, 2018: GOXI learning series, encontrado en: <http://goxi.org/page/goxi-learning-series>.
280. Entrevista Ricardo Morel Ex Vicepresidente de Antamina y ex gerente de relaciones comunitarias de Yanacocha y Angloamerican.
281. Intervención de Raúl Benavides Vicepresidente de Negocios de Buenaventura en reunión del Grupo de Diálogo Directo Noviembre del 2016

